COVITE
Colectivo de Víctimas del Terrorismo

OIET
OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

TERRORISMO, CRIMEN ORGANIZADO E INESTABILIDAD REGIONAL EN EL SAHEL Y ÁFRICA OCCIDENTAL

Desafíos para España y la Unión Europea

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

Junio, 2026

© de la edición: COVITE, 2026
COVITE
Apdo. de Correos 3358
20080 San Sebastián, Guipúzcoa (España)

© de los textos: su autor
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse o transmitirse de ninguna forma o por ningún medio, sea electrónico, mecánico, reprográfico, fotoquímico, óptico, de grabación o cualquier otra forma de almacenamiento de información o sistema de recuperación, sin el permiso previo y por escrito del editor.

Dirección e investigación: Ana Aguilera
Coordinación: Carlos Igualada

Resumen ejecutivo

En 2025, el Sahel y África Occidental consolidaron, por sexto año consecutivo, su posición como el epicentro mundial del terrorismo yihadista. Cuatro de los cinco países más afectados por el terrorismo en el mundo se encuentran en esta región. Los datos disponibles demuestran que el terrorismo ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente insurgente para convertirse en un actor híbrido capaz de ejercer una elevada letalidad operativa mientras aplica estrategias de gobernanza alternativa y control económico territorial.

Este informe examina, desde una perspectiva académica e interdisciplinar, la relación entre el terrorismo yihadista, el crimen organizado transnacional y la inseguridad en el Sahel y África Occidental, prestando especial atención a las implicaciones directas para España y la Unión Europea. La principal conclusión que se infiere es que el nexo entre terrorismo y economías ilícitas ha dejado de ser una relación de conveniencia táctica para convertirse en el motor principal de la reproducción y la expansión territorial de los grupos extremistas en la región, y que cualquier respuesta que no considere esa dimensión económica está condenada a reproducir sus propias limitaciones.

La simbiosis entre terrorismo y crimen organizado ha alcanzado un grado de integración estructural que trasciende lo que los análisis avanzaban hace apenas cinco años. Grupos como JNIM administran las economías ilícitas activamente, generando fuentes estables de legitimación social y construyendo economías de guerra que sostienen su capacidad de hacer frente a la presión contraterrorista en cada vez mayores áreas de la geografía africana, lo que les permite expandir su dominio hacia países fuera de su tradicional zona de influencia.

La reconfiguración geopolítica derivada de la retirada occidental y la entrada de aliados alternativos han provocado profundos cambios en los condicionantes estructurales de la inestabilidad sin aportar soluciones sostenibles, por lo que España y la Unión Europea deben reformular su estrategia regional hacia un enfoque que integre de manera coherente y cohesionada seguridad, gobernanza y desarrollo.

Principales conclusiones

1. Integración estructural: la simbiosis entre terrorismo y crimen organizado ha alcanzado un nivel de integración estructural y autosuficiente. Grupos como JNIM y EIS administran las economías ilícitas con el fin de generar fuentes estables de financiación, legitimación social y control territorial. Esta evolución ha creado auténticas economías de guerra que erosionan la autoridad estatal y confieren a los grupos una resiliencia que las respuestas exclusivamente militares han sido incapaces de contrarrestar.

2. Expansión al Golfo de Guinea: el yihadismo extiende de manera sostenida su operatividad hacia el Golfo de Guinea. Benín, Togo, Costa de Marfil y el norte de Ghana registran una presencia e influencia en aumento por parte de JNIM, que ha convertido el Complejo W-Arly-Pendjari en un corredor estratégico de expansión.

3. Inestabilidad geopolítica: la reconfiguración geopolítica ha agravado la inestabilidad estructural hasta el punto de que se ha prescindido de ciertos condicionalidades de gobernanza y derechos humanos que, en última instancia, alimentan y fomentan los mismos factores que favorecen el reclutamiento terrorista y la perpetuación de dinámicas entre los grupos armados y los mercados criminales.

4. Narcotráfico y peajes: el narcotráfico sigue representando uno de los principales ingresos de grupos como JNIM o Estado Islámico en el Sahel. Las rutas de cocaína desde América del Sur hacia Europa a través de África Occidental continúan expandiéndose y los grupos terroristas actúan como cobradores sistemáticos de peajes o impuestos de protección y vías de paso en las rutas bajo su control.

5. Minería ilegal de oro: la minería artesanal ilegal de oro se ha consolidado como la fuente de ingresos más estable y territorialmente arraigada de organizaciones como JNIM. El grupo controla directamente sitios de extracción en Burkina Faso y Mali, impone gravámenes en zonas de influencia y ha extendido su capacidad de explotación indirecta hacia el norte de Ghana.

6. Explotación humana: la explotación humana genera ingresos continuos y funciona como potente mecanismo de control social y territorial. Las rutas transaharianas parcialmente gestionadas por JNIM conectan directamente con el Mediterráneo.

RECOMENDACIÓN

España y la Unión Europea deben reorientar su estrategia africana hacia un enfoque integral que permita a la gobernanza y el desarrollo acompañar al factor securitario. La experiencia demuestra que las intervenciones centradas exclusivamente en la dimensión militar tienden a desplazar el problema sin resolver sus causas profundas, por lo que se requiere una respuesta que fortalezca instituciones, combata la corrupción de forma efectiva, ofrezca alternativas económicas reales a la juventud y se coordine con actores regionales que reconozcan la nueva realidad geopolítica.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción 6
2. Actores terroristas y reconfiguración geopolítica 8
2.1. Evolución de JNIM y Estado Islámico en el Sahel 9
2.2. El área del lago Chad y la expansión terrorista hacia el Golfo de Guinea 11
2.3. El vacío occidental y la entrada de Africa Corps 13
3. Las economías criminales y el terrorismo 16
3.1. Narcotráfico: rutas, actores y gravámenes 16
3.2. Minería ilegal de oro, contrabando de combustible y recursos naturales 20
3.3. Tráfico y contrabando de armas: fuentes y circuitos de proliferación 24
3.4. Explotación humana: trata, contrabando de migrantes y secuestros 27
3.5. Extorsión, blanqueo de capitales y financiación digital 32
4. Condicionantes estructurales de la simbiosis criminal 36
4.1. Fragilidad estatal y corrupción 37
4.2. Presión demográfica, desempleo juvenil y reclutamiento 39
4.3. Pobreza, inseguridad alimentaria e indicadores socioeducativos 42
5. Implicaciones para España y la Unión Europea 45
5.1. Intereses estratégicos europeos en juego 45
5.2. Evaluación de los instrumentos desplegados 49
5.3. Líneas de acción estratégica 51
6. Conclusiones 56
7. Referencias bibliográficas 58

1. Introducción

Cuando el 17 de septiembre de 2024 Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) asaltó la academia de gendarmería y el aeropuerto militar de Bámako en un ataque simultáneo, se llegó a afirmar que “los terroristas atacaron el corazón del complejo militar de Bámako” (Rich, 2024). Era una afirmación que, años atrás, habría sonado a exageración, pero que en 2024 era una descripción ajustada a la realidad. Este desplazamiento del centro de gravedad del conflicto saheliano desde los márgenes del norte de Mali hasta la capital política del Estado se entiende como el resultado de un proceso de acumulación de capacidades que lleva más de una década en marcha, con dimensiones económicas, además de militares, políticas y sociales, profundas.

La violencia yihadista en el Sahel es, a la vez, causa y consecuencia de un conjunto de fragilidades estructurales de largo recorrido que se han reforzado de manera complementaria. La debilidad crónica de las instituciones estatales, la porosidad extrema de las fronteras, la corrupción sistémica, el desempleo juvenil masivo en el continente con la pirámide demográfica más joven del planeta, la pobreza, las bajas tasas de alfabetización, la inseguridad alimentaria y la presión de las condiciones climáticas cíclicas son indicadores que impactan sobre la realidad local y obligan a considerar opciones dentro de los sistemas de la economía informal y criminal. A estos factores se suman dinámicas geopolíticas externas de gran calado que han reconfigurado las alianzas regionales en los últimos años, desplazando de forma progresiva la influencia occidental en favor de actores como Rusia, China o Turquía, cada uno con sus propias agendas y métodos de proyección de poder en el continente (Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, 2025b).

Lo que el análisis de las economías ilícitas en el Sahel pone de manifiesto es que las respuestas que ignoran la dimensión económica del fenómeno están condenadas a reproducir sus propias limitaciones. Los grupos armados pueden desplazarse, fragmentarse o reorientar sus tácticas ante la presión militar, pero la infraestructura de financiación criminal que los sostiene tiende a permanecer intacta o a fortalecerse cuando el Estado que debería combatirla está, al mismo tiempo, atrapado en ella. No es de extrañar que Ahmad documentara en su libro *Jihad & Co.: Black Markets and Islamist Power* que la línea que separa a un funcionario de un traficante y a un traficante de un combatiente yihadista el norte de

Mali se ha vuelto tan difusa que hablar de ellos como actores claramente diferenciados resulta, en muchos contextos, contraproducente para entender la problemática de fondo.

Mientras el Sahel y África Occidental se consolidan, por sexto año consecutivo, como el principal escenario global del terrorismo yihadista, la relación cada vez más orgánica y estructural entre la violencia extremista, el crimen organizado transnacional y la fragilidad institucional configura un entorno de amenaza complicado y con ramificaciones directas e inmediatas sobre los intereses estratégicos de España y la Unión Europea.

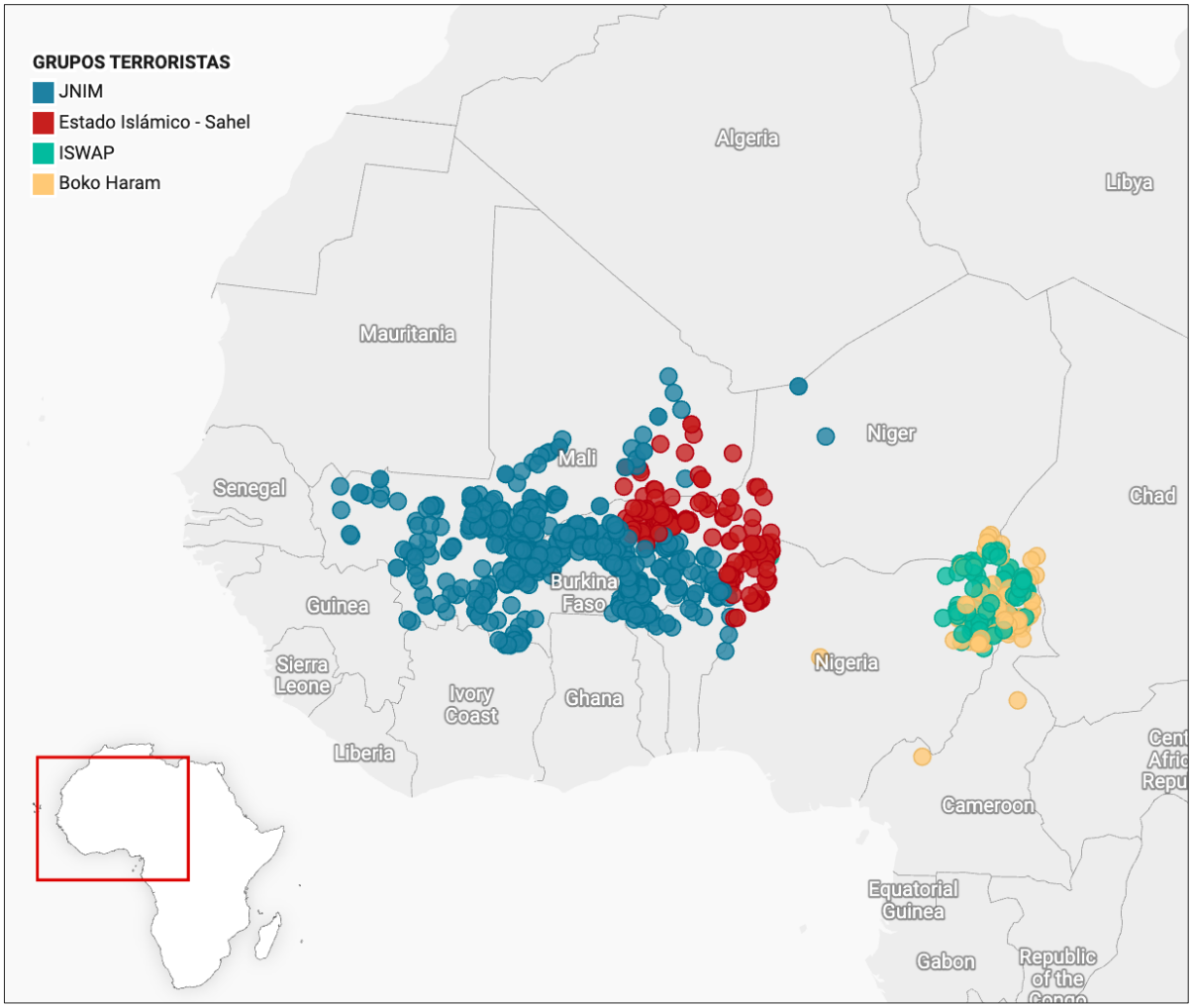
En 2025, el Sahel Central concentró el 72% de las muertes por terrorismo en todo el mundo. Los tres países que lo componen (Mali, Níger y Burkina Faso) fueron los que padecieron un mayor número de víctimas mortales por la actividad terrorista a nivel global

El presente informe nace en este contexto y tiene como objetivo central proporcionar un análisis estratégico, interdisciplinar y prospectivo sobre los desafíos entrelazados de seguridad, gobernanza y desarrollo en el Sahel y África Occidental, con especial atención a sus implicaciones directas para España y la Unión Europea. Frente a la tendencia todavía frecuente, tanto en el ámbito académico como en el político, de analizar el terrorismo y el crimen organizado como amenazas separadas y diferenciadas, esta investigación adopta la perspectiva que ha tomado en ediciones anteriores[1] y reconoce la naturaleza convergente y profundamente interconectada de ambos fenómenos. El yihadismo en África Occidental no puede considerarse un actor al margen de la economía política, como tampoco puede analizarse de forma aislada de las dinámicas del crimen organizado transnacional. Por tanto, cualquier política pública regional e internacional debe abordar los condicionantes que permiten la explotación de las economías criminales así como los indicadores socioeconómicos que permiten al extremismo violento alcanzar y dominar cada vez mayores espacios e influencia en una de las regiones más estratégicas para la seguridad del vecindario africano y europeo.

[1] Para más información, véase la última edición de los informes terrorismo-crimen organizado "Desafíos y amenazas a la seguridad en el Magreb, el Sahel y África Subsahariana: terrorismo y crimen organizado" del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

2. Actores terroristas y reconfiguración geopolítica

La evolución de los actores armados en el Sahel y su proyección hacia África Occidental se inserta en un entramado de fragilidades estructurales (estatales, de economías ilícitas y vacíos de gobernanza) que ha permitido la consolidación de una relación cada vez más orgánica entre el yihadismo y las redes criminales transnacionales. Esta sección examina la trayectoria de los principales grupos yihadistas, su expansión geográfica y la reconfiguración geopolítica derivada de la retirada occidental, prestando atención a cómo estos procesos refuerzan las dinámicas económicas que sustentan la resiliencia extremista y generan ramificaciones directas para la seguridad europea.



Mapa 1. Actividad de los grupos terroristas en África Occidental (enero-diciembre, 2025). Fuente: elaboración propia

2.1. Evolución de JNIM y Estado Islámico en el Sahel

Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) surgió en marzo de 2017 como una organización compuesta por facciones alineadas a Al Qaeda, integrando Ansar Dine (liderada por Iyad Ag Ghaly), el Frente de Liberación de Macina (katiba Macina, bajo Amadou Kouffa), Al Mourabitoun y elementos saharianos de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Esta arquitectura, cercana a una especie de confederación, mantiene una ventaja estratégica porque permite adoptar al mismo tiempo una dirección estratégica centralizada y una autonomía operativa para sus *kataib*, permitiendo una adaptación local que ha resultado clave para la supervivencia y expansión de la organización.

Estimaciones recientes del *Analytical Support and Sanctions Monitoring Team* de Naciones Unidas (2025) y otras fuentes sitúan sus efectivos entre 5.000 y 6.000 combatientes, consolidándolo como el grupo armado no estatal más capacitado de la región (Aguilera, 2026). La actividad de JNIM se concentra en el norte y centro de Mali, gran parte de Burkina Faso, oeste de Níger y franjas al norte de Benín, Togo y zonas fronterizas con Guinea y Costa de Marfil[2]. La katiba Macina, la más activa de todas las facciones que componen el grupo, es la responsable de aproximadamente el 75% de los episodios violentos atribuidos a JNIM, especialmente en el centro de Mali y norte de Burkina Faso (Eizenga y Williams, 2020).

Más allá de adoptar enfoques exclusivamente coercitivos, JNIM ha perfeccionado una estrategia de acercamiento a comunidades como actor de resolución de disputas y provisión de seguridad allá donde el Estado falla. Su estrategia de implementación local también pasa por facilitar el acceso a recursos (minas, rutas comerciales) y, una vez consolidada cierta legitimidad, imponer tributos y llevar a cabo actividades intensivas de reclutamiento. Esta forma de proceder genera sentimientos encontrados en las poblaciones locales, y su resistencia disminuye con el tiempo a medida que perciben al grupo como menos abusivo que fuerzas estatales o milicias aliadas. Ejemplo de ello se observa con el cierre gubernamental de minas artesanales, que ha provocado efectos adversos y que muchos mineros recurran a grupos como JNIM para reabrir operaciones y reforzar su rol como proveedor alternativo de oportunidades económicas (Lanzano, Luning y Ouédraogo, 2021).

[2] Entrevistas a fuentes de seguridad locales.

Por su parte, Estado Islámico en el Sahel (conocido como EI-Sahel, Estado Islámico- Sahel o EIS) también ha experimentado un rápido crecimiento tanto territorial como operativo. De unos 425 combatientes en 2018, ha pasado a entre 2.000 y 3.000 en 2025, con Níger como principal eje de expansión. Su rivalidad con JNIM es tanto territorial como económica, centrada en el área fronteriza entre Mali, Níger y Burkina Faso (Liptako-Gourma) y entre Níger, Nigeria y Benín a través de la red Lakurawa. En ambos focos, los dos grupos compiten por rutas de tráfico, yacimientos y control comunitario.

Las actuales dinámicas demuestran cómo el terrorismo ha experimentado una transición de grupos insurgentes o beligerantes a actores híbridos con capacidades de gobernanza alternativa y control territorial. Llegados a este punto, conviene no ignorar la dimensión económica, ya que hacerlo condenaría las respuestas a fuertes limitaciones estructurales. JNIM, en particular, ha demostrado una gran capacidad para llevar a cabo operaciones urbanas complejas (como los ataques en Bámako en septiembre 2024, los posteriores bloqueos de combustible en 2025 y la ofensiva a gran escala de abril de 2026), a través de una estrategia donde concurren actividades operativas de alta letalidad y estrategias de desgaste y asfixia económica.

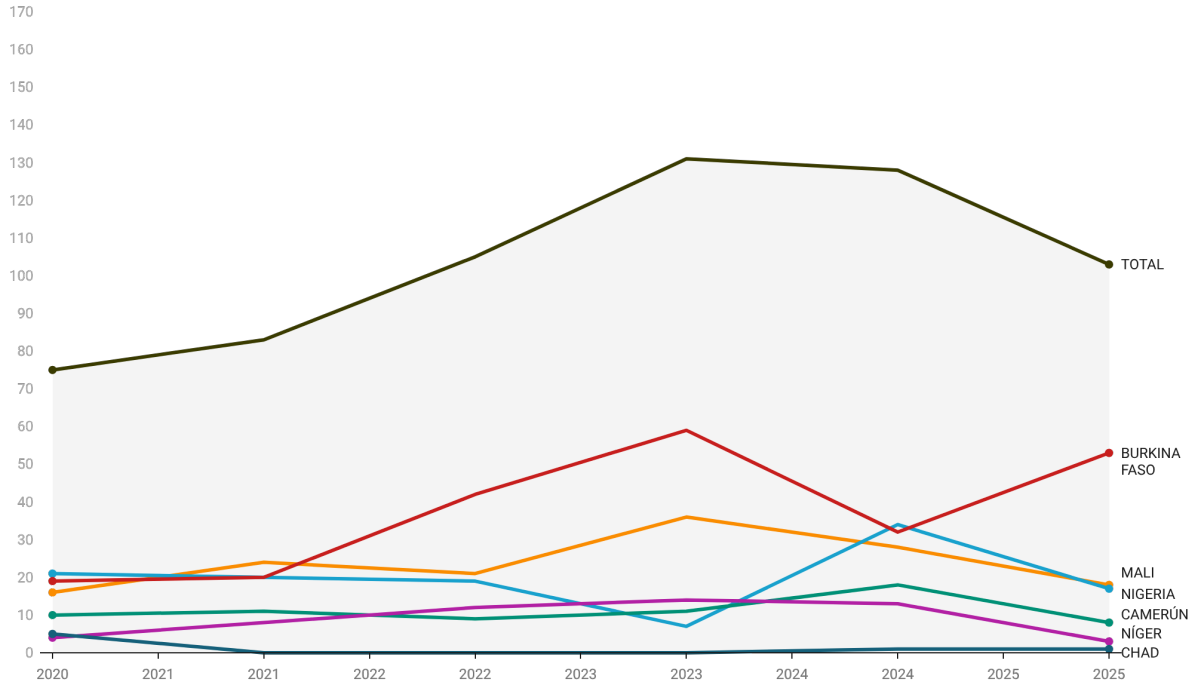


Figura 1. Evolución de ataques terroristas en África Occidental (2019-2025). Fuente: elaboración propia

A diferencia de la estrategia más gradual de JNIM, Estado Islámico en el Sahel ha apostado por una extrema letalidad operativa y una explotación de los recursos locales. Ejemplos de esta evolución pueden encontrarse con las operaciones en Banibangou (Níger, junio de 2025), el asalto a la base militar de Tessit (Mali, junio de 2025) o el ataque al aeropuerto internacional Diori Hamani de Niamey en enero de 2026, donde el grupo desplegó una capacidad operativa mediante el uso de drones, armas ligeras y tácticas de asalto coordinado. Esta sofisticación, sumado al creciente control sobre comercios y estructuras locales, la extorsión sistemática a comunidades, el robo de ganado y el cobro de peajes a convoyes de contrabando, forman parte de una estrategia donde la violencia de EIS se complementa con unos ingresos estables que sostienen su expansión territorial y operativa.

2.2. El área del lago Chad y la expansión terrorista hacia el Golfo de Guinea

La proyección de la violencia yihadista más allá del Sahel Central: también discurre hacia el área del Lago Chad y hacia los países costeros del Golfo de Guinea. Este último representa uno de los desplazamientos estratégicos de mayor trascendencia de los últimos cuatro años[3].

En el área del Lago Chad, la dinámica ha estado marcada por la actividad de dos facciones principales derivadas de la organización Boko Haram: Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) y los remanentes de Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad (JAS, también conocido simplemente como Boko Haram). ISWAP, en particular, ha consolidado una gran capacidad de resiliencia económica, operativa y propagandística. Lejos de limitarse a acciones insurgentes, el grupo ha desarrollado un sofisticado sistema de gobernanza paralela basado en la imposición sistemática de tributos (*zakat*[4]) sobre la pesca, la ganadería, la agricultura y el comercio local en las islas y orillas del lago. Según algunas estimaciones, ISWAP genera ingresos anuales que superan con creces los presupuestos de algunos gobiernos nacionales en la región, alcanzando cifras cercanas a los 191 millones de dólares solo por concepto de impuestos en el Lago Chad (ADF, 2025a). Esta economía de guerra incluye también el robo de ganado, el secuestro selectivo y el gravamen sobre rutas de contrabando de combustible y otros bienes, lo que le permite sostener una

[3] Entrevistas a fuentes de seguridad nacionales.
[4] El *zakat* a menudo se refiere al "gravamen" obligatorio que imponen algunos grupos armados, una práctica que distorsiona el significado de la tradicional de donación en el islam destinada a ayudar a los pobres.

estructura logística relativamente estable a pesar de la presión militar que se ejerce en el entorno regional a través de la Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF).

La rivalidad entre ISWAP y Boko Haram ha generado episodios intensos de confrontación directa, especialmente por el control de las islas del Lago Chad, que funcionan como santuarios logísticos, bases de extorsión y nodos de tráfico clave para el transporte de todo tipo de mercancías interregionales. Esta competencia no ha debilitado el conjunto del yihadismo en la cuenca, si bien ha condicionado parte del crecimiento territorial de los grupos en conflicto. Sin embargo, la confrontación mutua ha redistribuido capacidades y obligado a ambos grupos a diversificar sus fuentes de financiación, integrándose aún más en las economías ilícitas locales.

La expansión terrorista atraviesa el área de Lago Chad en un ejercicio de desestabilización en las fronteras con Níger y Nigeria, tanto en el segmento oriental como occidental. En este último es especialmente destacable la penetración hacia el sur, en dirección al Golfo de Guinea, donde grupos terroristas como JNIM han aumentado su influencia y control de manera significativa. Países como Benín y Togo padecen año tras año la violencia y el arraigo terrorista de JNIM – y cada vez más la sombra de Estado Islámico – en las zonas fronterizas con Nigeria, Níger y Burkina Faso, mientras que Costa de Marfil y Ghana continúan operando como nodo logístico y zona de repliegue, apoyo y descanso de buena parte de sus miembros. El Complejo W-Arly-Pendjari, parque transfronterizo entre Benín, Burkina Faso y Níger, se ha convertido en el principal corredor de penetración, tal y como confirman los datos sobre la progresión geográfica de los eventos violentos hacia el sur (ADF, 2026).

Los materiales propagandísticos de JNIM han manifestado de forma explícita el interés por establecer bases logísticas y santuarios en los países del Golfo de Guinea, al contar con mejor infraestructura y donde es más fácil obtener materiales prioritarios como combustible, motocicletas, precursores para explosivos o medicamentos, especialmente en aquellos espacios donde la capacidad de respuesta de las fuerzas locales permanece relativamente contenida o es insuficiente. Esta voluntad de expansión les permite además diversificar las fuentes de financiación y reducir la dependencia de las rutas transaharianas, cada vez más disputadas entre JNIM y el EIS, en el espacio transfronterizo entre Níger y Mali.

En el caso del norte de Ghana, la región de Upper West funciona como un nodo logístico clave para JNIM sin que el grupo necesite mantener una presencia armada visible. En esta región, los canales de suministro de recursos como el oro funcionan a través de redes comerciales dominadas por intermediarios, en su mayoría burkineses, que transportan de contrabando los bienes hacia el sur de Burkina Faso. En concreto, entre el 60% y el 70% del oro artesanal extraído en la zona pasa por estos canales informales (Hunter y Ofosu-Peasah, 2025). Por tanto, la invisibilidad operativa puede explicarse en la necesidad terrorista de financiar las actividades de sus combatientes, una necesidad confirmada, al menos en el tráfico de motocicletas. Esta red paralela de la economía legal, muy frecuente en estos espacios, complicaría en gran medida las respuestas estatales para coartar ese canal de financiación de los grupos violentos, teniendo en cuenta el carácter transfronterizo que proporciona a los actores armados una ventaja competitiva frente a las fuerzas del orden.

JNIM ha manifestado en repetidas ocasiones su interés por establecer bases logísticas y santuarios en países del Golfo de Guinea

En el noroeste de Nigeria y zonas fronterizas, ciertos actores han surgido o se han consolidado con el paso de los años. Tal es el caso de la red Lakurawa (vinculada a Estado Islámico en el Sahel) y la milicia Mahmuda, que operan como puentes entre el teatro del Golfo de Guinea y el Sahel. Estos grupos se caracterizan por una hibridación entre elementos criminales locales y tintes terroristas, y sirven como actores nexo que facilitan el movimiento de combatientes, armas y recursos a lo largo de corredores forestales como el Parque nacional de Kainji[5]. Así, redes y grupos asociados o afiliados a JNIM y Estado Islámico explotan las tensiones étnicas ya preexistentes en los conflictos locales, disputas por recursos escasos y el descrédito de ciertas operaciones de las fuerzas de seguridad para consolidar su influencia.

2.3. El vacío occidental y la entrada de Africa Corps

La retirada de las fuerzas francesas e internacionales del Sahel, culminada con la salida de los últimos contingentes de Mali en agosto de 2022 y el fin formal de la Operación Barkhane, junto con la disolución de la MINUSMA a finales de 2023, han generado un vacío de seguridad

[5] En el Parque nacional de Kainji operan y mantienen presencia multitud de actores relacionados con el extremismo violento, tales como la red Lakurawa, la milicia Mahmuda, elementos de Ansaru, Boko Haram y redes vinculadas a JNIM.

con consecuencias para la inestabilidad y la proliferación de retos en la región. El espacio securitario fue ocupado progresivamente por fuerzas auxiliares alternativas, mayoritaria pero no únicamente por Africa Corps (la estructura sucesora del Grupo Wagner, refundada bajo denominación oficial rusa en diciembre de 2023), con presencia fundamentalmente en Mali y países de la órbita, como la República Centroafricana, y asistencia en otros como Burkina Faso o Níger, ofreciendo apoyo militar directo a las juntas a cambio de concesiones de explotación y acceso estratégico.

La presencia de Africa Corps como solución a los desafíos regionales se ha enfrentado desde el inicio a contradicciones y rechazos en el entorno local. En Mali, algunas investigaciones apuntan que las fuerzas nacionales y sus aliados rusos fueron responsables de más del 77% de las víctimas civiles durante los primeros ocho meses de 2025 (Tagziria y Bird, 2025). Estas cifras forman parte de un patrón de violencia sistemática contra comunidades sospechosas de colaborar con el yihadismo y presentan un problema de proporcionalidad en el uso de la fuerza que destruye las bases de legitimidad del gobierno que Africa Corps pretende sostener, mientras proporciona a JNIM y EIS argumentos propagandísticos para sus actividades de reclutamiento y legitimación. La Operación Barkhane fue criticada en su día por dinámicas similares, y ahora la única diferencia visible, en un sentido operativo, es que Africa Corps trabaja sin ninguna de las condicionalidades de derechos humanos que las fuerzas occidentales mantenían como marcos normativos de referencia.

El modelo de intercambio que estructura la relación entre Africa Corps y las juntas sahelianas ha desempeñado un papel fundamental para fortalecer la influencia de Rusia en África. Este sistema de apoyo militar, supeditado a acuerdos de derechos de explotación minera y acceso a recursos estratégicos, va más allá de la óptica geopolítica y se enmarca también en la perspectiva económica. La entrada del grupo paramilitar ruso en el ecosistema de recursos del Sahel ha introducido un nuevo actor con intereses comerciales y económicos propios en un sistema ya saturado de competidores. En Mali, el Grupo Wagner y su sucesor directo, el Africa Corps, desde el principio operó en lo que el *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* describe como “la zona gris donde las economías lícitas e ilícitas se funden” (Stanyard, 2025). Este modelo, reproducido previamente en República Centroafricana, donde empresas pantalla vinculadas a Wagner como Lobaye Invest y Midas Ressources SARLU obtuvieron permisos de extracción de oro y diamantes en zonas clasificadas como de alto

riesgo por el Proceso de Kimberley, acumuló más de 2.000 millones de dólares en beneficios ilícitos en pocos años. Fondos que, según las investigaciones, sirvieron para financiar las operaciones militares rusas en Ucrania y evadir el impacto de las sanciones occidentales (Shoer, 2024). En Mali, representantes de Wagner mantuvieron reuniones con autoridades malienses en abril de 2022 para obtener permisos de explotación en yacimientos estratégicos como la mina Fekola, intentando reproducir el modelo extractivo centroafricano. Tras la muerte de Prigozhin en agosto de 2023 y la reconfiguración del Grupo Wagner bajo el paraguas del Africa Corps, ahora subordinado directamente al Ministerio de Defensa ruso, este entramado no desapareció sino que se institucionalizó, expandiéndose a vecinos como Níger o Burkina Faso en 2024. En este último, la junta concedió en abril de 2025 una licencia minera industrial a la empresa rusa Nordgold para explotar el yacimiento aurífero de Niou, en un contexto de nacionalización acelerada del sector minero que aleja a los inversores occidentales y abre paso a operadores afines a Moscú (Reuters, 2025).

La Unión Europea, que a través de las misiones EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali y EUCAP Sahel Níger había invertido recursos considerables en la formación de fuerzas de seguridad locales, ha sido testigo de cómo esa inversión se veía comprometida con los giros políticos de las juntas llegadas al poder de manera inconstitucional. La restricción progresiva de las operaciones de EUTM en Mali y su posterior suspensión de facto, así como la expulsión de las fuerzas especiales estadounidenses de Níger tras el golpe de julio de 2023, eliminaron varios de los pilares de la estrategia de seguridad occidental en la región y redujeron sustancialmente la capacidad de anticipación de las agencias de inteligencia europeas sobre los flujos que atraviesan el Sahel.

El resultado de estos movimientos es una fragmentación del espacio de seguridad regional que favorece la adaptación y expansión de los grupos violentos[6]. Las juntas han ganado autonomía formal respecto a los marcos normativos occidentales, pero a costa de una menor coordinación regional, una mayor dependencia de actores externos con agendas no necesariamente alineadas con las necesidades locales y una erosión de los estándares de comportamiento de las fuerzas de seguridad frente a la población civil.

[6] Entrevistas a fuentes de seguridad locales.

3. Las economías criminales y el terrorismo

Las economías criminales que financian y sostienen el terrorismo yihadista en el Sahel y África Occidental forman un ecosistema integrado y estructuralmente funcional en el que rutas, actores, infraestructuras y mecanismos de protección se entrelazan de manera sistemática entre los distintos mercados ilícitos. Por poner un ejemplo, los mismos grupos que cobran peajes a los traficantes de droga en los pasos del Sahel gravan el tránsito de personas y supervisan los sitios de minería artesanal bajo su influencia, lo que convierte a las economías ilícitas en un pilar central de la supervivencia económica y financiera del terrorismo. A continuación se analizan algunas de las más relevantes.

Las economías ilícitas representan un pilar fundamental de la supervivencia económica y financiera del terrorismo

3.1. Narcotráfico: rutas, actores y gravámenes

África Occidental se ha consolidado en la última década como una de las piezas estructurales del narcotráfico global, un proceso impulsado tanto por el endurecimiento de los controles en rutas más directas entre productores y consumidores como por la disponibilidad de redes criminales locales con arraigo territorial y conocimiento logístico del terreno. Según el *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* (GI-TOC, 2025a), en el caso de la cocaína, al menos el 30% de la mercancía destinada a los mercados europeos transita actualmente por África Occidental, y varios de los grupos del crimen organizado transnacional más poderosos del mundo operan ya en este mercado regional.

Los datos de incautaciones muestran una tendencia clara al alza en el tráfico de drogas, si bien conviene destacar que buena parte de las confiscaciones no se informan a las autoridades internacionales que registran y monitorizan los flujos de tránsito de las diferentes variedades de narcóticos ilegales disponibles, por lo que las cifras deben tomarse con cautela.

Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el tráfico de drogas en el Sahel publicado en abril de 2024, las incautaciones de cocaína en los cinco países de la región pasaron de una media de 13 kg anuales entre 2015 y 2020 a 1.466 kg en 2022. En el primer semestre de 2023, Mauritania ya había interceptado 2.300 kg antes

de que el año cerrara sus estadísticas (UNODC, 2024a). Entre enero de 2019 y junio de 2024 se registraron al menos 126 toneladas incautadas en o procedentes de la región, una cuarta parte de ellas en aguas del Golfo de Guinea, lo que hace suponer que las cifras reales son en realidad mucho mayores (Anane-Amponsah, 2024).

La resina de cannabis, producida mayoritariamente en Marruecos y con una producción estimada en 901 toneladas en 2022, es la segunda droga más incautada en los países del Sahel, después de la planta del cannabis, y es transportada principalmente por vía terrestre desde Marruecos hacia Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad, y desde allí hacia el Norte de África y Europa (UNODC, 2024b).

Existen dos principales vías de tránsito complementarias para el tránsito de la droga, que acaban encontrándose en los mismos corredores. La primera es la entrada marítima a través de los puertos del Golfo de Guinea, especialmente Dakar, Conakry y Lagos, seguida de una distribución terrestre hacia el interior y el norte. La segunda es el corredor transahariano de largo recorrido, organizado históricamente en torno a redes de parentesco tuareg y árabe que heredaron la logística del comercio caravanero precolonial. Desde aproximadamente 2020, el *Transnational Organized Crime Threat Assessment* de la UNODC documenta además una diversificación parcial de la ruta de la resina de cannabis, que empieza a circular también por vía marítima desde Marruecos hacia los puertos de Benín y Togo (UNODC, 2024b). Esta flexibilidad de rutas demuestra la capacidad de adaptación de las redes criminales ante la presión policial, y a la vez una variable que complica los esfuerzos en la lucha contra el mercado criminal de narcóticos.

Cuando se intenta abordar la relación entre el narcotráfico y el extremismo violento, la pregunta que emerge no es tanto si coexisten en el espacio, sino qué tipo de relación mantienen y con qué grado de integración. La evidencia disponible apunta a que la modalidad predominante en la actualidad es la tributación indirecta (el llamado “impuesto al narcotráfico”), no la gestión directa de su tráfico. El propio informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2024 reconoce que la evidencia directa de la participación de grupos extremistas violentos en el tráfico es bastante limitada, pero que ello no conlleva una ausencia de participación, y concluye que grupos como JNIM y Estado Islámico en el Sahel “se benefician probablemente de manera indirecta” del narcotráfico,

imponiendo tasas o gravámenes a los traficantes en los territorios bajo su control (UNODC, 2024b). Esta formulación a la hora de abordar la relación entre ambos fenómenos criminales es el resultado de décadas de seguimiento de un fenómeno opaco, descentralizado y con graves ausencias de datos e intercambio de información disponibles[7].

Lo que se confirma desde la literatura existente, y se infiere de la multitud de entrevistas a personal local y conocedor del fenómeno, es que JNIM ha desarrollado un modelo de participación en la industria de la droga que minimiza su exposición directa sin dejar de maximizar sus beneficios[8]. El mecanismo que impera es el cobro sistemático de gravámenes, conocido como impuesto del narcotráfico o gravamen de protección y/o de paso, perfeccionado por Mokhtar Belmokhtar, reconocido líder de Al Mourabitoun y asociado a la órbita de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), hoy integrado en JNIM. Este modelo permite al grupo obtener ingresos regulares sin participar activamente en el transporte de la mercancía, unos beneficios que podrían llegar a alcanzar más de una cuarta parte de sus ingresos anuales[9] (Europol, 2019).

Sin perjuicio de lo anterior, cabe la posibilidad de que individuos asociados a grupos terroristas, particularmente en la órbita de Al Qaeda, pero también de Estado Islámico o Boko Haram, colaboren en la fase de transporte de droga. De hecho, existen casos documentados de personas que han combinado de forma simultánea actividades en el mercado criminal y la militancia en organizaciones yihadistas. Sin embargo, esta evidencia no debe extrapolarse a la actuación de dichos grupos como coordinadores o líderes de las redes de narcotráfico, ya que su rol, por el momento, parece limitarse a ser una pieza más dentro del entramado criminal de la subregión africana.

Un elemento que ha ganado relevancia en los últimos años, aunque la evidencia directa siga siendo limitada, es el intercambio de resina de cannabis marroquí por cocaína sudamericana sin mediación de efectivo, documentado por el *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* como práctica consolidada desde 2020. Este mecanismo de trueque entre

[7] Entrevistas a fuentes de seguridad locales.
[8] Entrevistas a fuentes de seguridad locales.
[9] El informe de Europol no hace referencia exclusivamente a un grupo terrorista en particular, sino que engloba en su estimación a grupos como Al Shabaab, Boko Haram o JNIM.

continentes permite a los traficantes operar fuera del sistema bancario formal al mismo tiempo que reduce los riesgos asociados a la confiscación de efectivo en los cruces fronterizos.

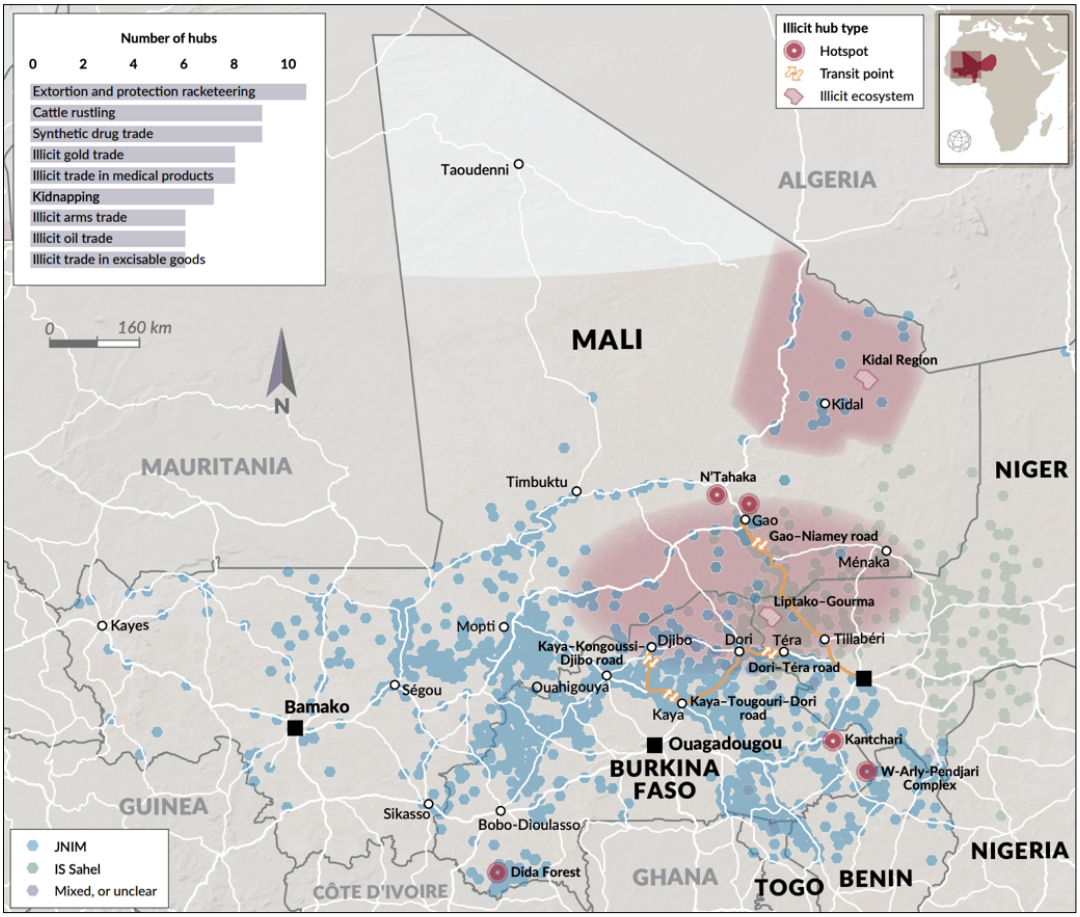
Al menos el 30% de la cocaína destinada a los mercados europeos transita actualmente por África Occidental

Para los grupos armados que gravan el tránsito, la naturaleza del cargamento, ya sea cocaína o hachís, ida o vuelta, es secundaria respecto al valor de la mercancía y a la disposición del transportista a pagar el peaje. Lo que importa es el control del corredor, no lo que circula por él. Esta lógica explica en parte por qué la distinción entre grupos yihadistas y otros grupos armados en la región resulta relevante a la hora de entender quién hace qué en el entramado del narcotráfico. El informe sobre la evaluación del crimen organizado en el Sahel de la UNODC (2024b) distingue de manera explícita entre grupos armados yihadistas, sobre los que la evidencia de implicación directa en el tráfico es todavía escasa, y otros grupos armados no extremistas y nacionalistas de la región conocida como el Azawad, al norte de Mali, cuya participación activa en el tráfico de drogas está mucho más documentada y resulta directamente funcional para su supervivencia económica y la compra parcial de armamento.

En cuanto a la naturaleza exacta de la relación, un estudio reciente publicado en Studies in Conflict & Terrorism en mayo de 2025, que analiza 408 incidentes documentados de la interacción entre terrorismo y tráfico de drogas durante cuatro décadas, advierte contra la tendencia a tratar este vínculo como un fenómeno uniforme, y defiende que cada grupo y cada contexto geográfico requiere su propio análisis (Jupp, 2025). Aplicado al Sahel, esto se puede traducir en aceptar que la relación no encaja del todo en ninguna de las categorías habituales, ni convergencia estructural ni simple coexistencia, sino que se sitúa en un punto intermedio que cambia según el grupo, la ruta y el momento político-militar concreto.

El narcotráfico y la inestabilidad se retroalimentan en el Sahel en un ciclo vicioso que la UNODC identifica explícitamente como tal. La debilidad del Estado de derecho facilita la expansión de la economía de la droga, la cual, a su vez, genera recursos para sostener o intensificar los conflictos armados. Estos conflictos erosionan aún más las instituciones y el Estado de derecho (UN News, 2024). Que los grupos yihadistas participan en algún punto de

este ciclo, aunque su rol exacto siga siendo objeto de debate, es hoy una realidad ampliamente documentada y asumida por la mayoría de analistas y actores involucrados.



Mapa 2. *Hubs* de extorsión y protección en el Sahel Central y áreas de actividad terrorista. Fuente: Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2025); ACLED (2025)

3.2. Minería ilegal de oro, contrabando de combustible y recursos naturales

La minería artesanal ilegal de oro ha irrumpido en los últimos cinco años como la fuente de ingresos más estable, predecible y territorialmente arraigada para JNIM, superando en muchos contextos a la economía de las drogas. Este sector representa hoy una de las columnas vertebrales de la economía de guerra yihadista en el Sahel, considerando que el grupo ha conseguido controlar territorios donde se encuentran varios yacimientos en Burkina Faso, Mali[10] y Níger, impone gravámenes regulares a los mineros en zonas de influencia y ha

[10] En el sur de Mali, donde afiliados a JNIM como la Katiba Macina están cosechando importantes victorias territoriales, se concentra la mayor parte de la minería a gran escala industrial, lo que la convierte en un área estratégicamente importante para la economía del país. Fuente: Africa Center for Strategic Studies, 2025.

extendido su capacidad de explotación indirecta hacia el norte de Ghana y otras áreas limítrofes. Estos yacimientos tienen la capacidad de generar ingresos anuales superiores a los 34 millones de dólares, según el Africa Center for Strategic Studies (2020), y eso sin incluir los gravámenes indirectos y el control de las cadenas de comercialización.

El mecanismo de extracción varía según el grado de control territorial que ejerce el grupo. En las zonas donde JNIM mantiene un dominio hegemónico, exige un porcentaje directo de la producción a cada minero, dependiendo de la productividad del sitio y del poder de negociación local. En áreas de influencia indirecta, el grupo cobra impuestos a los intermediarios comerciales que compran y transportan el mineral, creando una red de colaboradores forzados o voluntarios que actúan como extensiones logísticas del propio grupo. Esta técnica permite a JNIM maximizar ingresos mientras reduce su exposición directa en zonas de mayor riesgo militar, tal y como ocurre con la economía de las drogas.

Los países regionales han tratado de cortar los flujos financieros hacia los grupos extremistas, como en el caso de Burkina Faso, que se ha visto obligado a cerrar varias minas artesanales en el país para no engrosar los ingresos de grupos violentos como JNIM. No obstante, esta medida ha tenido efectos contrarios a los previstos en tanto que los mineros, privados de sus medios de subsistencia, tienden a buscar en el propio grupo una vía para continuar operando, reforzando involuntariamente su papel como proveedor alternativo de seguridad y oportunidades económicas en un contexto de fuerte represión estatal (Lanzano, Luning y Ouédraogo, 2021). En el sur de Burkina Faso, cerca de la frontera con Costa de Marfil, JNIM llegó incluso a abrir tierras forestales protegidas para la explotación minera artesanal, consolidando su presencia en zonas que el Estado había abandonado o cerrado (ADF, 2025b). En Níger, el cierre de los yacimientos del Plateau de Djado en 2017 por razones de seguridad siguió una lógica similar, desplazando a miles de mineros hacia redes informales fuera del control estatal (Bird y Hunter, 2022).

La importancia estratégica de la minería ilegal va más allá de los ingresos directos y el control de los yacimientos permite a JNIM reclutar mano de obra local, generar lealtades comunitarias y crear dependencias económicas que dificultan las operaciones militares nacionales y transnacionales. Los mineros, muchos de ellos extremadamente jóvenes y sin otras alternativas laborales, se convierten en una reserva de potenciales combatientes o de

apoyo logístico. También han aumentado el número de secuestros, tanto de locales como de trabajadores internacionales, y empresas extranjeras involucradas en la explotación de los recursos naturales en el Sahel Central.

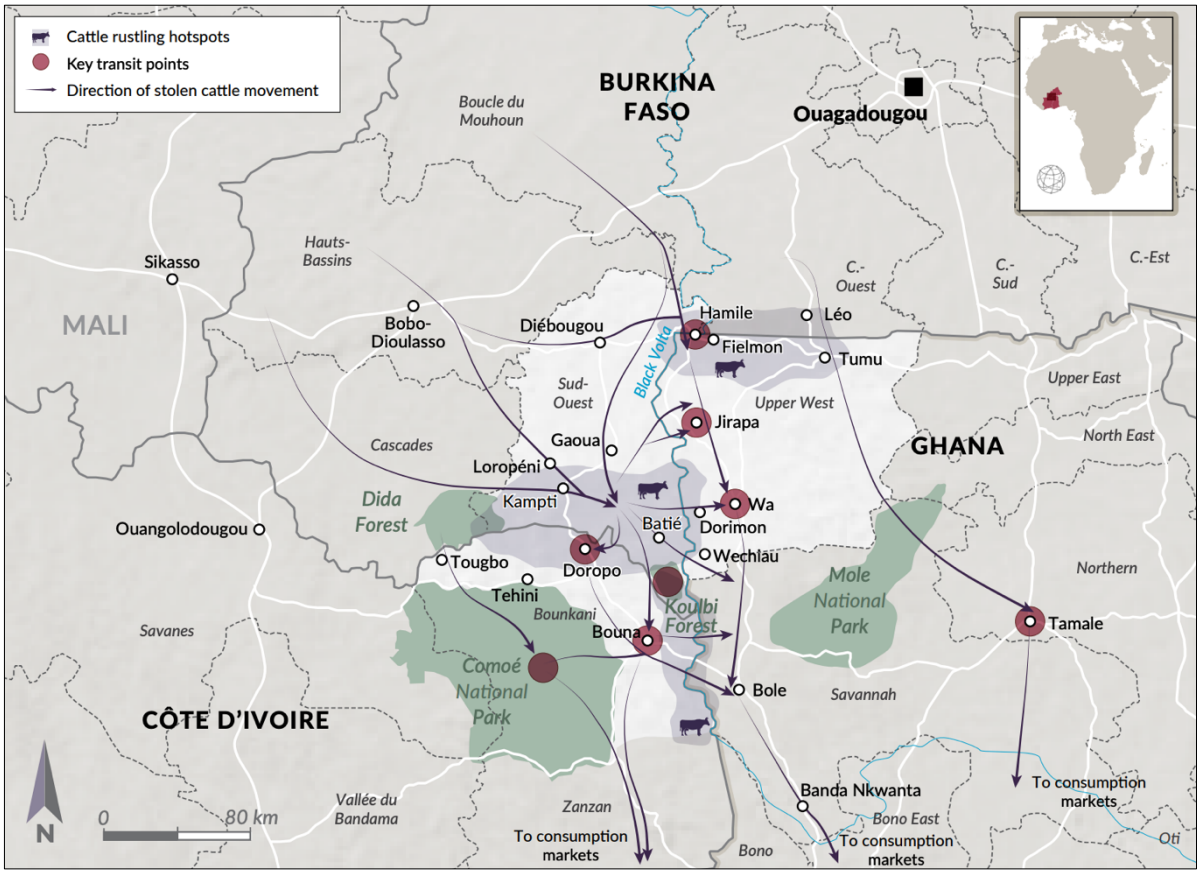
Además de las actividades de reclutamiento, de boicot y de secuestro, los yacimientos de recursos son especialmente relevantes en tanto que el oro funciona como moneda de cambio dentro del ecosistema criminal, y puede ser intercambiado por armas, combustible, munición o incluso información de inteligencia. La oposición al control terrorista puede tener consecuencias graves, como quedó demostrado con el caso de la mina artesanal de oro en las afueras de la localidad de Solhan (provincia de Yagha), al noreste de Burkina Faso, donde miembros de JNIM irrumpieron en el yacimiento y dispararon contra todo aquel que se cruzara en su camino. El ataque se saldó con la vida de al menos 140 personas, civiles en su mayoría (Dufka, 2021).

La comercialización del oro artesanal ilícito extraído en yacimientos de Burkina Faso y Mali sigue una cadena de suministro que, a través de múltiples intermediarios locales y regionales, dirige el mineral hacia centros de acopio y puertos costeros en el Golfo de Guinea. Desde estos puntos, el oro es reexportado principalmente hacia el Golfo Pérsico, principal destino mundial del oro artesanal africano, aunque también fluyen volúmenes significativos hacia Suiza, India y China. Esta estructura opaca de la cadena de suministro facilita el blanqueo del oro y su posterior integración en los circuitos formales del mercado internacional (UNODC, 2023; Lewis, McNeill y Shabalala, 2019; Hunter, 2022).

El contrabando de combustible, aunque menos visible en los informes mediáticos, constituye otra fuente de ingresos constante y altamente rentable. La diferencia de precios entre países, resultado de distintas políticas de subsidios estatales, generan márgenes comerciales muy atractivos para grandes organizaciones criminales. En la frontera entre Burkina Faso y Benín, por ejemplo, los sobornos pagados a funcionarios de seguridad para facilitar el tránsito de camiones oscilan entre 553 y 1.106 dólares por vehículo, cantidades que superan ampliamente los salarios oficiales de los agentes fronterizos (UNODC, 2024c). JNIM y otras redes controlan puntos estratégicos en estas rutas y cobran peajes adicionales, convirtiendo el contrabando en un negocio sistemático, extremadamente organizado y altamente beneficioso.

Esta economía del combustible es especialmente relevante porque abastece directamente las operaciones de los grupos armados. Las motocicletas, principal medio de transporte de los terroristas en el Sahel, dependen de un suministro constante y barato de combustible, por lo que controlar estas redes permite a JNIM mantener su movilidad operativa incluso en periodos de fuerte presión militar.

Otros recursos naturales que también entran en el esquema de explotación sería el robo de ganado, especialmente en zonas pastoriles, como medio de generar ingresos significativos y como herramienta de presión sobre comunidades que se resisten al control y la dominación. Del mismo modo, el control de ciertos bosques y zonas de recolección de madera o productos agrícolas permite generar todavía mayores fuentes de ingresos y reforzar el dominio territorial, de santuario logístico y de descanso de sus operaciones.



Mapa 3. Rutas de robo de ganado y puntos de venta en la zona fronteriza de Burkina Faso, Ghana y Costa de Marfil. Fuente: Flore Berger (2025)

La explotación de recursos naturales ha permitido a JNIM construir una economía de guerra autosuficiente, extremadamente organizada y territorialmente asentada. A diferencia del narcotráfico, que depende de flujos externos variables, la minería de oro y el contrabando de combustible ofrecen ingresos más estables y predecibles, lo que explica en buena medida la resiliencia demostrada por el grupo frente a las operaciones militares regionales e internacionales.

3.3. Tráfico y contrabando de armas: fuentes y circuitos de proliferación

El tráfico y el contrabando de armas sigue siendo uno de los elementos centrales que sostienen la capacidad operativa de los grupos terroristas en el Sahel y África Occidental. Más de una década después del colapso del régimen libio en 2011, los arsenales saqueados durante la crisis de aquel entonces continúan alimentando los conflictos regionales con una perseverancia que ninguna iniciativa internacional ha logrado revertir en la actualidad. Las estimaciones disponibles indican que entre 250.000 y 700.000 armas salieron de los depósitos de Gadafi en el caos posterior a su caída y, de ese volumen, entre 10.000 y 20.000 piezas han sido rastreadas en Mali, Níger, Chad y Sudán, aunque la cifra real posiblemente se multiplique hasta por cuatro (Aguilera, 2023).

Los arsenales libios han satisfecho buena parte de la demanda de armas en el Sahel, y ante la reducción de armamento disponible, bien por confiscaciones de las fuerzas nacionales, bien por pérdida, robo o desuso, o debido al trasvase de armas hacia otras zonas de conflicto, el flujo inicial se ha visto obligado a diversificarse mediante asaltos a cuarteles y convoyes de las fuerzas armadas nacionales, filtraciones por prácticas corruptas de mandos militares y policiales, capturas directas en enfrentamientos y compras en mercados negros regionales[11]. *Conflict Armament Research* (2022) ha documentado cómo una parte sustancial de la munición y las armas que utilizan los grupos sahelianos procede de arsenales nacionales o regionales, mientras que la prevalencia de calibre OTAN en las incautaciones apunta a una mezcla de procedencias que incluye material saqueado en Libia, suministros robados o desviados de ejércitos nacionales y rutas de aprovisionamiento externas.

[11] Entrevistas a fuentes de seguridad nacionales.

El yihadismo no puede considerarse un actor al margen de la economía política ni de las redes de crimen organizado, que incluyen el tráfico de armas procedentes principalmente de arsenales libios (vía Paso del Salvador y Agadez) y del desvío de arsenales estatales locales. JNIM, con mayor control de espacios y rutas, se beneficia especialmente de las redes de contrabando transahariano que conectan el sur de Libia con el Sahel a través de corredores dominados por tribus tuareg y árabes. Estas redes no solo trasladan armas ligeras y munición, sino también componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados (IED). La evolución técnica de estos IED ha sido significativa en los últimos años, incorporando detonadores más sofisticados y diseños que dificultan su detección.

Estado Islámico, por su parte, depende en mayor medida de capturas directas a fuerzas estatales y de alianzas puntuales con redes criminales locales, aunque se beneficia ampliamente del contrabando desde el área al sur de libia bajo su control. En el sureste de Níger, una gran parte de las armas recuperadas de combatientes de ISWAP procedían de arsenales nacionales saqueados, demostrando cómo la debilidad de las fuerzas de seguridad facilita el robo de material, que a su vez incrementa la capacidad ofensiva de los combatientes y permite nuevas capturas de material y armamento. Boko Haram, por su parte, recurre en gran medida al contrabando de armas hacia Nigeria, principalmente a través de las fronteras con Camerún y Benín, y, como en el caso de ISWAP, depende ampliamente de capturar armas en asaltos a puestos de control militares y comisarías de policía para abastecerse.

El tráfico de armas se integra plenamente en el resto de economías criminales de la región, y las rutas utilizadas para el narcotráfico y el contrabando de combustible sirven también para mover armamento. Los puntos de control donde JNIM cobra peajes a traficantes de droga operan igualmente como nodos de control para convoyes de armas. Esta interconexión logística permite a los grupos optimizar recursos y reducir riesgos de detección, por lo que es común observar cómo un mismo convoy puede transportar oro o combustible hacia el norte y regresar con armas y munición.

Recientemente, se ha constatado una evolución en el uso táctico del armamento disponible, especialmente en el caso de JNIM, que ha incrementado de forma significativa el empleo de drones comerciales modificados, combinados con IED de mayor complejidad y sofisticación. La organización ha demostrado capacidad para fabricar y desplegar estos artefactos

utilizando componentes de doble uso, lo que complica las labores de inteligencia y neutralización. Esta mejora tecnológica reduce la brecha con las fuerzas estatales y multiplica el impacto de cada operación, especialmente en emboscadas contra convoyes y bases militares, por lo que con menos medios, JNIM ha perfeccionado su capacidad de operar en remoto y/o de manera simultánea.

Mapa 4. Mapa de corredores de tráfico ilícito de armas en el Sahel Occidental. Fuente: elaboración propia.

A pesar de los múltiples esfuerzos internacionales, el control del tráfico y contrabando de armas sigue siendo uno de los grandes fracasos colectivos en la región. Las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los programas de marcaje y rastreo de armas ligeras y las iniciativas de cooperación regional han tenido un impacto bastante limitado frente a la porosidad fronteriza, los niveles de corrupción y el enorme volumen de material en circulación. Tampoco ayuda la ausencia de un intercambio de información e inteligencia sostenido entre los países sin acceso al mar y los del litoral, habida cuenta de las animadversiones y tensiones geopolíticas entre los países del Sahel y el resto, salvo algunas excepciones. Varios informes han advertido de forma recurrente que, sin un control riguroso de los flujos procedentes de Libia y sin una reforma profunda de la gobernanza de los

arsenales nacionales, cualquier progreso en otros ámbitos tendrá un carácter temporal o insuficiente, a lo que se suma el trasvase de armamento (y combatientes) de otras zonas de conflicto que, como Sudán, están necesitadas de armas tanto para el conflicto como para defenderse del mismo, con clientes tanto insurgentes como civiles. En esta línea, es complicado pensar que vaya a haber alguna reducción en el mercado informal de armas, teniendo en cuenta la multitud de actores interesados en disponer de ellas.

3.4. Explotación humana: trata, contrabando de migrantes y secuestros

La explotación humana constituye una de las fuentes de ingresos y herramientas de reclutamiento más estables para los grupos yihadistas activos en el Sahel, precisamente porque se apoya en infraestructuras criminales preexistentes y en dinámicas de vulnerabilidad estructural que ninguna intervención militar ha logrado desmantelar. Las históricas rutas de caravana transaharianas se han convertido en corredores logísticos polivalentes donde el movimiento de personas, mercancías, armas y combatientes se entrelaza de forma deliberada, generando ingresos recurrentes a través de peajes, rescates y trabajo forzado. Lejos de tratarse de una actividad marginal o parasitaria respecto al proyecto político-militar yihadista, la explotación humana se ha integrado de manera orgánica en la estrategia de control territorial de organizaciones como JNIM, Estado Islámico en el Sahel y Boko Haram/ISWAP en la cuenca del lago Chad.

La columna vertebral de esta economía criminal es la ruta migratoria que discurre desde Mali y Níger hacia el norte, con Agadez como nodo histórico, para continuar hacia el sur de Argelia, la Libia meridional (en particular Fezán) y, finalmente, las costas mediterráneas. Esta ruta se articula en varios segmentos, cada uno dominado por redes étnicas, tribales o yihadistas distintas, con una lógica de franquicia criminal que facilita tanto la resiliencia del sistema como la opacidad frente a las agencias de seguridad.

En el segmento saheliano, los principales operadores son contrabandistas pertenecientes a las comunidades tuareg y tubu/tebu, muchos de ellos con antecedentes como excombatientes de las rebeliones de los noventa y principios de los 2000, o con vínculos directos con milicias libias de la misma pertenencia étnica. Los “facilitadores” o “pasadores” (*passeurs*) que encabezan las redes de Agadez cobran entre 200 y 350 dólares por trasladar a

un migrante desde la ciudad hasta la frontera libia (Adeleye, 2025), una cifra que se ha abaratado significativamente desde que el gobierno militar nigerino derogó, en noviembre de 2023, la ley de criminalización del contrabando de migrantes aprobada en 2015 bajo presión europea (Fereday, 2025). La derogación de esa norma, que había empujado los flujos a rutas más peligrosas y clandestinas durante casi una década, disparó los volúmenes de tránsito en Agadez durante la primera mitad de 2024, aumentando en paralelo los ingresos de los grupos armados que imponen peajes sobre estas vías.

El área de Liptako-Gourma y la región de Mopti han sido identificadas como los principales puntos calientes donde JNIM se inserta en estas cadenas de suministro ilícitas (Kapetanovic, 2025). Los traficantes que operan en estas zonas aceptan la "protección" de JNIM frente a lo que perciben como autoridades corruptas, mientras que el grupo impone tasas inferiores a las que exigían los funcionarios estatales desplazados, comprando así la cooperación de redes que, de otro modo, podrían convertirse en fuente de resistencia local. La violencia de JNIM contra las rutas de autobús interregionales, con ataques sobre los corredores Uagadugú-Niamey a través de Kantchari en 2021, y sobre la ruta alternativa vía Dori y Téra en 2022, obligó a las compañías de transporte regional a cancelar sus servicios, redirigiendo los flujos migratorios hacia la ruta Togo-Benín y multiplicando los costes e intermediarios involucrados (GI-TOC, 2024).

El área de Liptako-Gourma y la región de Mopti han sido identificadas como los principales puntos calientes donde JNIM se inserta en las cadenas de suministro ilícitas

En el extremo norte de la ruta, ya en territorio libio, la gestión del tráfico humano[12] se traslada a redes étnicas con base en Fezán. Las comunidades tubu/tebu y tuareg controlan en gran medida las rutas de contrabando que parten de las fronteras meridionales de Libia, con líderes como Adamu Tchéké y Abu Bakr al-Suqi que cobran peajes en efectivo por el trayecto desde la frontera hasta la ciudad de Sebha, mientras que los miembros de las tribus Awlad Suleiman y Megarha organizan el tramo siguiente, desde Sebha hasta el noroeste del país. A

[12] Estas evidencias se registraron en 2018, por lo que las rutas o las figuras intermediarias pueden haber variado con el tiempo.

estos actores locales se superponen redes subsaharianas, principalmente de origen nigeriano y ghanés, que operan desde almacenes en Qatrun, Awbari, Sebha y Murzuq, capturando a los migrantes a su llegada al país y explotándolos mediante sistemas de deuda forzada (Bocchi, 2018). En 2023, un panel internacional de expertos identificó que las redes libias de traficantes tenían presencia activa en al menos diecisiete países, entre ellos Bangladés, Egipto, Eritrea, Etiopía, Marruecos, Níger, Nigeria y los Emiratos Árabes Unidos, recurriendo al reclutamiento fraudulento y a la explotación sistemática de los migrantes durante el trayecto y ya en suelo libio (U.S. Department of State, 2025a).

En Mali, JNIM ha desarrollado un sistema consolidado de "impuestos de protección" sobre los flujos migratorios. El portavoz del grupo, Bina Diarra, y el segundo al mando operativo, Sedane Ag Hita, han sido identificados por agencias de inteligencia occidentales como parte de la cadena de mando que supervisa la coordinación con redes criminales en las regiones de Mopti, Ségou y Gao. Los traficantes malienses cobran entre 1.000 y 2.500 euros por trasladar a un migrante desde Mali hasta la frontera argelina, con pagos adicionales a intermediarios tuareg para garantizar el tránsito por zonas bajo influencia de JNIM. La tasa de protección que impone la organización oscila en torno a los 300 euros por persona en los tramos bajo su control directo (Aguilera, 2024). El cerco de Tombuctú, iniciado en agosto de 2023 y aún activo, demuestra cómo el bloqueo territorial se usa, además de para presionar militarmente al gobierno maliense, para cortar las rutas comerciales legales y obligar a comerciantes y viajeros a pagar peajes yihadistas como única alternativa al aislamiento absoluto.

La derogación de la ley antitráfico en noviembre de 2023 por parte de la junta militar que derrocó al presidente Bazoum en julio de ese mismo año transformó radicalmente el panorama del contrabando de migrantes en Níger. Esta política, adoptada inicialmente bajo presión europea y que había logrado reducir el número de migrantes que transitaban por Agadez, fue eliminada por el nuevo gobierno militar (Eaton y Tinti, 2024). El resultado fue una reactivación de las redes de *passeurs*, con tarifas más bajas desde Agadez hasta Libia pero con un grado significativamente mayor de violencia y explotación en los tramos siguientes. Los flujos migratorios se incrementaron sustancialmente en los primeros meses de 2024 a través de Agadez, mientras que los costes de transporte desde esa ciudad hasta Libia descendieron considerablemente, en un contexto en el que el bandidaje aumentó en el norte del país, con combatientes chadianos atacando convoyes de alto valor y grupos armados, entre ellos JNIM

y EI-Sahel, imponiendo cobros forzosos de *zakat* y apropiándose de ganado y efectivo en las regiones de Tillabéri y Tahoua (GI-TOC, 2025b). El cierre de la frontera nigerina con Benín tras el golpe de julio de 2023 interrumpió las rutas migratorias regulares y provocó un repunte del contrabando humano a través del río Níger, disparando los beneficios de los facilitadores y deteriorando los medios de vida locales (GI-TOC, 2024).

Por su parte, ya en la sección anterior se había apuntado al hecho de que Burkina Faso se ha convertido en un laboratorio donde la intersección entre la economía minera, el crimen organizado y la explotación yihadista se lleva produciendo de manera sistemática. Las organizaciones extremistas violentas, en particular JNIM y EIS, han perpetrado ataques sobre escuelas, centros de salud y yacimientos mineros, lo que ha generado un desplazamiento masivo que alimenta directamente los flujos de migrantes vulnerables (U.S. Department of State, 2024a). La expansión de la minería artesanal del oro ha generado entornos de alto riesgo donde se documentan casos de trata de personas. Diversas investigaciones han identificado redes que reclutan fraudulentamente a mujeres y niñas nigerianas con ofertas de empleo en comercios o salones de belleza, para luego explotarlas sexualmente en situación de servidumbre por deuda en campamentos mineros, zonas cercanas o contextos donde la presencia del Estado es prácticamente inexistente y la de los grupos armados, constante (U.S. Department of State, 2025b). La complicidad de funcionarios gubernamentales y la debilidad estructural de los mecanismos de investigación han permitido que estas redes operen con una impunidad ampliamente documentada, con el 90% de los traficantes condenados recibiendo sentencias suspendidas total o parcialmente (U.S. Department of State, 2024b).

En el área de lago Chad, Boko Haram/ISWAP representan los casos más extremos de integración de la explotación humana en el modelo operativo yihadista. Ambos grupos han mantenido de forma continuada la práctica del reclutamiento forzoso, el secuestro y el uso de niños soldado desde los doce años como cocineros, espías, mensajeros, guardaespaldas, combatientes y kamikazes en países como Nigeria, Camerún y Chad (U.S. Department of State, 2023). En lo que respecta a la violencia de género institucionalizada, las investigaciones de UNIDIR (2024) documentan los mecanismos con que Boko Haram instrumentaliza el matrimonio forzado: en las comunidades capturadas, el grupo emitía ultimátums explícitos

según los cuales, si todas las jóvenes no eran casadas en un plazo de tres días, comenzarían las ejecuciones (Nagarajan et al., 2024).

En Libia, las organizaciones internacionales estiman que el 76% de los hombres, el 67% de las mujeres y el 77% de los menores en tránsito por el país experimentan indicadores de explotación y abuso equivalentes a la trata. Los nodos de trabajo forzado se concentran en las ciudades de Sebha, Brak al-Shati, Shwayrif y Bani Walid, con una prevalencia especialmente alta de explotación sexual de mujeres y niñas en Ubari, Sebha y Murzuq (U.S. Department of State, 2025a). Bani Walid, en el extremo nororiental del teatro del país, se ha consolidado como nodo central del rescate de migrantes secuestrados, donde bandas armadas, en su mayoría hombres jóvenes, torturan a las víctimas y envían grabaciones a sus familias para extorsionar el pago (Alharathy, 2024).

Los grupos yihadistas han integrado la explotación humana en su estrategia de control territorial a través de una de las prácticas históricamente más documentadas entre las fuentes de financiación de Al Qaeda en África: los secuestros. Los secuestros a cambio de un rescate continúan siendo utilizados de forma selectiva por Al Qaeda y sus afiliados. Según ACLED, JNIM perpetró 845 de los 1.100 secuestros registrados en Mali, Burkina Faso y Níger entre 2017 y 2023 (Laplace, 2023). Aunque los rescates de occidentales generan unas sumas elevadas, como los 40.5 millones de dólares obtenidos en 2020 por la liberación de un ciudadano francés y dos italianos, desde mediados de 2020 en adelante la mayor parte de la actividad se ha centrado en secuestros locales que sirven tanto para obtener recursos como para intimidar y someter a las comunidades (ADF, 2023). La capacidad de JNIM para mantener durante meses o años a rehenes en campamentos móviles en el interior del Sahel, aprovechando la cobertura de las propias redes de contrabando para trasladarlos, demuestra hasta qué punto la economía del secuestro y la del tráfico humano comparten infraestructuras logísticas.

En las zonas bajo control efectivo de JNIM o Boko Haram, la explotación humana tiene una dimensión que trasciende el simple beneficio económico y que es también un mecanismo de reordenamiento social. Los matrimonios forzados sirven para cimentar alianzas entre facciones, recompensar a combatientes destacados y reducir la movilidad autónoma de las mujeres en las comunidades sometidas. El reclutamiento forzoso de menores documentado

en Mali, Burkina Faso, Nigeria y Camerún destruye la cohesión familiar y convierte a una parte de la juventud en actores participantes de la violencia contra su propia comunidad de origen, dificultando cualquier proceso de reconciliación posterior. El uso de mano de obra cautiva en minas de oro artesanales y campamentos constituye una fuente de financiación directa que, a diferencia de los rescates o los peajes migratorios, no requiere negociación con ningún intermediario externo.

La distinción operativa entre migrante económico, desplazado por el conflicto y combatiente en movimiento se ha vuelto prácticamente inoperante sobre el terreno, no solo por las dificultades de obtener documentación en los países de origen, sino porque las mismas redes que facilitan el tránsito de personas transportan también combatientes, armas y recursos financieros, ofreciendo a los grupos armados un canal logístico de baja visibilidad. Al integrarse en los conflictos comunitarios y en las redes de contrabando, JNIM refuerza su resiliencia, su capacidad de reclutamiento y su implantación territorial en zonas fronterizas frágiles (Cengiz, 2026).

La convergencia de actividades de contrabando de migrantes, trata y secuestros permite a los grupos terroristas diversificar riesgos, generar ingresos y mantener una presencia constante en amplios territorios sin necesidad de confrontaciones permanentes con las fuerzas estatales[13]. Se trata de una economía criminal de baja visibilidad pero alto rendimiento, extraordinariamente resistente a las operaciones militares convencionales, precisamente porque sus nodos operativos son en gran medida indistinguibles de las actividades comerciales y de subsistencia ordinarias de las poblaciones locales.

3.5. Extorsión, blanqueo de capitales y financiación digital

La extorsión constituye la práctica criminal más extendida y estructural dentro de las economías que sostienen al yihadismo en el Sahel y África Occidental. A diferencia del narcotráfico o la minería ilegal, que dependen de factores externos o de la disponibilidad de recursos específicos, la extorsión descansa en el control directo del territorio y de las actividades económicas cotidianas, convirtiéndola en una fuente de ingresos continua, adaptable y de bajo perfil operativo. JNIM y afiliados de Estado Islámico son actores que han

[13] Entrevistas a fuentes de seguridad locales.

desarrollado sistemas de tributación forzada que afectan a casi todos los sectores productivos bajo su influencia, desde el comercio de cereal y el transporte por carretera hasta la pesca artesanal y la ganadería.

En la cuenca del lago Chad, ISWAP ofrece uno de los mejores ejemplos de esta estrategia. El grupo impone tasas regulares a los pescadores por cada canoa que sale a faenar y por cada camión de pescado que abandona los puertos bajo su control, con permisos que oscilan entre los 13 y los 196 dólares, a los que se suman gravámenes adicionales por caja de producto o cabeza de ganado transportada, en una recaudación que podría ascender a unos 150.000 dólares solo en concepto de permisos de entrada. Esta lógica fiscal se aplica de manera análoga al comercio de cereales, la ganadería trashumante, el transporte interurbano y las pequeñas actividades mercantiles en mercados locales. El investigador Malik Samuel (2025) registra cómo estos cobros, sumados al resto de fuentes analizadas, podrían acercar los ingresos anuales del grupo a los 200 millones de dólares.

Lo que distingue este sistema de la extorsión criminal convencional es su carácter cuasi-institucional. Los grupos no se limitan a cobrar dinero, sino que establecen normas, definen exenciones según lealtades o utilidad, sancionan incumplimientos y redistribuyen una parte de los recursos en forma de protección o resolución de disputas. Esta aproximación, analizada por Lessing (2021) como gobernanza criminal, permite a los grupos construir una legitimidad funcional entre poblaciones que perciben al Estado como lejano, corrupto o represivo. En muchas comunidades rurales, el pago del tributo se ha normalizado como condición para poder seguir trabajando o abrir nuevos negocios, lo que dificulta en gran medida las operaciones militares que no están acompañadas de alternativas de gobernanza efectivas.

El blanqueo de capitales representa el complemento necesario e intrínseco a la extorsión masiva. Los ingresos procedentes de peajes, tributos, minería ilegal y secuestros deben integrarse en circuitos que permitan su uso operativo y su conversión en capacidades militares. A diferencia del tráfico de armas, el blanqueo no utiliza esas infraestructuras para mover materiales físicos, sino para insertar valor en la economía formal o semiformal, haciendo irreconocible su origen ilícito.

El oro artesanal constituye uno de los principales instrumentos de blanqueo en el Sahel Central y otros espacios. Su alto valor por unidad de peso, su facilidad de transporte y su posibilidad de integración en mercados internacionales lo convierten en el vehículo ideal para esta función. Los grupos violentos que se apoderan de minas de oro, ya sea de forma directa o mediante el cobro de impuestos o gravámenes de protección, sacan de contrabando la mayor parte del mineral hacia compradores en los mercados internacionales. Según UNODC (2023), el oro es especialmente atractivo para los grupos armados violentos precisamente por su utilidad en el blanqueo de capitales y los flujos financieros ilícitos.

La escala de los flujos de oro ilícitos es colosal y se evidencia en la brecha estadística entre las exportaciones declaradas por los países de origen y las importaciones registradas en destino: por ejemplo, en 2019 Mali declaró exportar a los Emiratos Árabes Unidos apenas media tonelada de oro, mientras que los EAU registraron la importación de casi 81 toneladas procedentes de Mali, según datos del portal de Naciones Unidas Comtrade (Whitehouse, 2023). En la fecha más reciente disponible a la que se ha podido tener acceso (2023), las cifras continúan con un fuerte desajuste en sus respectivas balanzas comerciales. Mali registra unas exportaciones al país árabe de casi 1 tonelada de oro frente a las 77 toneladas que se registran en sentido contrario. Esta divergencia entre lo declarado en origen y lo registrado en destino, y sin ningún otro motivo de peso declarado, supone la huella cuantitativa de un contrabando estructural que, en la medida en que atraviesa territorios bajo control o influencia de grupos terroristas, genera puntos de contacto con las economías de guerra del yihadismo.

Las cadenas de intermediarios que actúan en este circuito operan con una lógica que busca deliberadamente dificultar su rastreo. Redes con base en Togo han sido registradas adquiriendo oro en Burkina Faso, introduciéndolo de contrabando en ese país y utilizando los ingresos de su venta para comprar mercancías en nombre de empresas burkinesas vinculadas a los propietarios de las sociedades togolesas (UNODC, 2023). Entre 2023 y 2026, la Brigada Nacional Antifraude del Oro de Burkina Faso (BNAF) cerró 25 oficinas ilegales de compraventa de oro y recuperó más de 10.000 millones de francos CFA (aproximadamente 16.8 millones de dólares) en multas y penalizaciones, con 78 kilogramos de oro incautado y 93 casos abiertos por fraude. Las autoridades han descrito estas redes como una amenaza para los ingresos públicos y parte del problema más amplio de flujos financieros ilícitos vinculados a la inseguridad en el país (Adeyemi, 2026).

Emiratos Árabes Unidos y el negocio del oro: caso de estudio

Bruce Whitehouse (2023) apunta a que Bámako se ha consolidado durante la última década como el principal nodo regional de transbordo ilícito de metales preciosos desde África Occidental hacia el Golfo Pérsico, con cargamentos de oro que en algunos casos tienen su origen en Senegal, Burkina Faso, Guinea y Sierra Leona, e incluso, según la red europea contra la delincuencia organizada y el terrorismo (ENACT), en Venezuela (Abderrahmane, 2022). En el extremo receptor, los Emiratos Árabes Unidos presentan una vulnerabilidad regulatoria documentada por organismos internacionales que facilita la integración de flujos de origen ilícito en su mercado aurífero. El análisis del *Global Initiative against Transnational Organized Crime*, basándose en la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF) sobre los EAU publicada en 2020 y el análisis del *Carnegie Endowment for International Peace* (CEIP) sobre el informe del GAFI, concluyó que el país no estaba gestionando eficazmente el blanqueo de capitales y expresó preocupaciones sobre su capacidad para combatir la financiación del terrorismo, señalando como factores de riesgo específicos la gran apertura de su sector financiero (Hunter, 2020).

El sector de metales preciosos fue identificado expresamente como de alto riesgo, con más de 7.000 distribuidores activos altamente expuestos a transacciones en efectivo. El propio GAFI reconoció que el valor de las incautaciones de oro en los EAU era “probablemente inferior al esperable dado su papel como principal punto de tránsito internacional” y que, pese a que fuentes abiertas documentaban actividades de contrabando de oro desde África Occidental hacia los EAU, no se registró ninguna incautación ni confiscación al respecto entre 2013 y 2018 (GAFI, 2020). El mecanismo que hace posible esta opacidad, según confirma Hunter, se basa en que los distribuidores del mercado de Dubái pueden adquirir oro presentando únicamente un formulario aduanero de los EAU, sin obligación alguna de declarar el origen del mineral, lo que permite que el oro artesanal procedente de cualquier país sea absorbido por el mercado sin trazabilidad. Una vez vendido como chatarra y refinado, el mineral queda desvinculado de su cadena de custodia original e integrado en los flujos legales del comercio internacional de oro. Esta arquitectura regulatoria presenta las condiciones que hacen posible que flujos de origen ilícito, incluidos los procedentes de zonas en conflicto o bajo control terrorista, puedan ser integrados en su mercado aurífero sin trazabilidad suficiente.

Otras modalidades de blanqueo incluyen la venta de ganado robado en mercados transfronterizos (que convierte activos en especie en liquidez inmediata, aunque técnicamente opera más como captación de recursos que como blanqueo en sentido estricto), la inversión en pequeñas empresas de comercio minorista y el uso de Servicios de Transferencia de Dinero o Valores (MVTS, por sus siglas en inglés). JNIM, por ejemplo, mueve fondos a lo largo de las rutas bajo su control y, en determinados casos, a través de redes hawala. También invierte en pequeños negocios y tiendas, presta dinero a comerciantes y utiliza ocasionalmente el sistema bancario formal, insertándose en el comercio local de maneras que generen ingresos y refuercen su legitimidad (Martynova, 2025). Las redes de Estado Islámico, como ISWAP, también confían en hawala como método de transferencia de fondos, pero sobre todo lo convierten en Monero, una criptodivisa que se inserta en un mercado de criptomonedas donde operan una de cada diez personas de las 240 millones que habitan Nigeria (ADF, 2025c; France 24, 2026).

4. Condicionantes estructurales de la simbiosis criminal

La capacidad de los grupos yihadistas para mantener y expandir su influencia en el Sahel y África Occidental descansa sobre un conjunto de condiciones estructurales profundas y mutuamente reforzadas que hacen posible la simbiosis entre el terrorismo y el crimen organizado[14]. Estas condiciones, desde la fragilidad institucional crónica, la corrupción sistémica y la presión demográfica, hasta el desempleo juvenil masivo, la pobreza estructural y el cambio cíclico de las condiciones del clima, operan como parte de un mismo mecanismo que reduce los costes de la militancia, aumenta los beneficios percibidos de la participación en las economías ilícitas y erosiona de manera continuada la legitimidad de los Estados ante sus propias poblaciones. En última instancia, las variables socioeconómicas de esta sección permiten abrirse a formas alternativas de gobernanza que JNIM y Estado Islámico han sabido explotar con una coherencia estratégica que sus adversarios estatales rara vez han igualado. Estos grupos han aprendido a transformar el agravio en reclutamiento, la escasez en legitimidad y la ausencia del Estado en presencia propia.

[14] Fuentes de seguridad locales.

4.1. Fragilidad estatal y corrupción

La fragilidad institucional de los países en el Sahel constituye el condicionante estructural más determinante y el que mejor explica la resiliencia del yihadismo frente a más de una década de intervenciones militares, programas de desarrollo y misiones de formación de las fuerzas de seguridad. Según los datos del Índice de Estados Frágiles en su última edición de 2024, los países de la región se posicionan con algunos de los índices de fragilidad más elevados del planeta. Teniendo en cuenta que la primera posición la ocupa el país más frágil del mundo (en este caso, Somalia) y el último lugar el menos frágil (Noruega), resulta preocupante examinar la subregión del Sahel Central y comprobar cómo Mali ocupa la posición 14, mientras que Níger se sitúa en el puesto 17 y Burkina Faso en el 19 (Fund for Peace, 2024). Esta debilidad es el resultado acumulado de datos económicos adversos, ciclos recurrentes de crisis políticas que han interrumpido los procesos de construcción institucional y de la aceleración que los golpes de Estado de 2020 en Mali, 2022 en Burkina Faso y 2023 en Níger han supuesto para el deterioro de unas estructuras que ya eran frágiles antes de que la violencia terrorista comenzara a presionarlas.

La incapacidad del Estado para proyectar una autoridad efectiva más allá de las capitales y las ciudades medianas ha dejado vastas extensiones rurales y fronterizas en un vacío de gobernanza que no es percibido como vacío por quienes lo habitan, sino como abandono, y, en muchos casos, como rechazo y marginalización deliberada. En 2025, JNIM y Estado Islámico en el Sahel controlaban o ejercían una influencia significativa sobre más del 40% del territorio de Burkina Faso, mientras que amplias zonas del centro y norte de Mali han visto desaparecer la presencia estatal en cualquiera de sus dimensiones, tanto en la administración civil como en los servicios básicos, la justicia o en las garantías de seguridad. El desplazamiento masivo que ello ha generado (cerca de cinco millones de personas desplazadas en la región, según ACNUR) es al mismo tiempo consecuencia y amplificador de la fragilidad, con unas comunidades desplazadas que han terminado por romper los vínculos comunitarios que históricamente actuaban como amortiguadores frente a la radicalización. Los vacíos que dejan atrás en los territorios de origen se apropian automáticamente por los grupos armados como nuevos espacios de control e influencia, perpetuando un ciclo de inestabilidad difícil de combatir.

La fragilidad institucional se manifiesta de manera especialmente visible en la pérdida del monopolio de la violencia legítima. Las Fuerzas Armadas de Mali, Burkina Faso y Níger han sufrido derrotas militares de considerable envergadura frente a fuerzas no estatales con recursos a menudo inferiores, lo que apunta a problemas estructurales de mando, moral, logística y de inteligencia que van mucho más allá de la mera disparidad de medios. A ello se le suman las críticas por el uso desmedido de la fuerza y las continuas violaciones a los derechos humanos sobre la población local. En Mali, Africa Corps y las fuerzas malienses son señalados como responsables de grandes masacres, documentadas por investigaciones independientes (Aguilera, 2026), lo cual tiene un efecto directamente contraproducente sobre los objetivos declarados de la lucha contraterrorista porque destruyen la legitimidad del Estado ante la población que debería proteger. También proporciona a JNIM y a Estado Islámico argumentos propagandísticos, de legitimidad y nuevas bases de reclutamiento con una efectividad que ninguna campaña de comunicación gubernamental ha logrado contrarrestar.

La corrupción también actúa como parte de la infraestructura que alimenta la actividad e influencia del extremismo violento. Según la evaluación de *Transparency International*, Burkina Faso se encuentra en el rango de riesgo “crítico” (F) de corrupción en sectores como la defensa, mientras que Mali, Níger y Nigeria ocupan la banda E de riesgo “muy alto” (TI-DS, 2024). En los puntos de control fronterizo, los sobornos pagados por traficantes de combustible, droga o migrantes superan con frecuencia los salarios oficiales mensuales de los agentes de seguridad y aduana, convirtiendo la corrupción en una opción económica atractiva en un contexto de fuerte precariedad salarial. En escalones superiores de la jerarquía estatal, se produce la complicidad de alcaldes, gobernadores provinciales y altos mandos militares en redes de minería ilegal de oro y contrabando de armas, una implicación que no solo impide la respuesta estatal efectiva contra las economías ilícitas sino que destruye cualquier posibilidad de que las instituciones sean percibidas como árbitros neutrales o proveedores imparciales de justicia.

Esta corrupción endémica debilita la capacidad operativa del Estado, reduciendo su información de inteligencia, su cohesión de mando y su legitimidad ante los aliados regionales e internacionales que, comprensiblemente, se muestran reticentes a transferir capacidades a estructuras cuya fiabilidad no se puede garantizar. También proporciona a los grupos

armados un componente narrativo y de propaganda de enorme potencia movilizadora. JNIM, en particular, se ha posicionado sistemáticamente como una fuerza que combate a las instituciones y figuras corruptas que gobiernan desde las capitales y sus periferias mientras las comunidades rurales quedan abandonadas a su suerte, un relato que resulta especialmente efectivo cuando los hechos del entorno inmediato lo apoyan con una regularidad que ningún desmentido oficial puede neutralizar (Kapetanovic, 2025).

La corrupción proporciona a los grupos armados un componente narrativo y de propaganda de enorme potencia movilizadora

Las juntas militares que llegaron al poder tras los golpes de Estado prometieron en todos los casos combatir la corrupción y restituir la dignidad del Estado frente a las élites civiles previas. En la práctica, sin embargo, la evidencia disponible sugiere que han reproducido, y en algunos casos concentrado, las oportunidades de extracción ilegal en círculos reducidos vinculados al poder militar. En Burkina Faso, las denuncias de corrupción en la adjudicación de contratos de seguridad y en la gestión de los yacimientos mineros han sido recurrentes, aunque la represión del espacio cívico hace cada vez más difícil documentarlas con rigor (Hunter, 2020; BTI, 2026). En Mali, la concesión de licencias de explotación aurífera a entidades vinculadas a su socio de seguridad ruso y el patrón de apropiación de yacimientos estratégicos apuntan a la reproducción del modelo extractivo en una relación que algunos analistas aciertan en describir como “protege la junta y protege las minas” (Reynolds et al., 2026).

4.2. Presión demográfica, desempleo juvenil y reclutamiento

El Sahel alberga una de las estructuras demográficas más jóvenes y de mayor crecimiento del planeta, y esa realidad es una de las variables más determinantes para comprender por qué los grupos yihadistas encuentran continuamente un flujo de potenciales reclutas[15]. En Níger, la tasa de fertilidad se ha mantenido entre las más altas del mundo durante la última década, con 5.9 hijos por mujer según datos del Banco Mundial más actuales (2024). Según las proyecciones de UNICEF (2017), la mitad de los niños del mundo serán africanos al final del presente siglo y las proyecciones demográficas para 2050 apuntan a que los tres países del

[15] Entrevistas a fuentes de seguridad nacionales.

Sahel Central (Mali, Burkina Faso y Níger) habrán duplicado su población actual si las tendencias actuales de fertilidad se mantienen, generando una presión sobre mercados de trabajo, servicios públicos, tierras y recursos hídricos que ningún escenario de gobernanza actual está en condiciones de gestionar.

El reto no es simplemente el volumen de jóvenes, sino la incapacidad estructural de las economías locales para absorberlos en empleos dignos y estables. El desempleo juvenil supera el 50% en las áreas urbanas de países como Burkina Faso (DCAF, 2021), aunque las estadísticas formales subestiman la magnitud real del problema, ya que la mayor parte de la fuerza de trabajo joven opera en el sector informal, donde la precariedad, la ausencia de protección social, los ingresos irregulares y la dependencia de ciclos agroclimáticos volátiles son la norma, no la excepción. Según el Informe sobre Tendencias Globales de Empleo para la Juventud de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) correspondiente a 2024, el crecimiento económico proyectado para África Subsahariana en 2025 tendrá un impacto muy limitado sobre la tasa de desempleo juvenil, dados los efectos del "*youth bulge*" demográfico, que genera una oferta de fuerza laboral nueva muy superior a la capacidad de absorción de economías poco diversificadas y escasamente capitalizadas.

En este contexto, la afiliación a grupos armados como Al Qaeda o Estado Islámico puede representar para muchos jóvenes una decisión que no responde primariamente a convicciones religiosas o ideológicas sino a una racionalidad económica coherente con las alternativas disponibles, basadas en la atracción que les genera disponer de un salario regular, estatus social en comunidades donde la protección armada tiene un gran valor simbólico, acceso a armas y movilidad y la posibilidad de participar en actividades económicas ilícitas que generan ingresos muy superiores a los del sector formal o informal ordinario. Los estudios más recientes sobre motivaciones de reclutamiento en el Sahel matizan esa visión que reduce el fenómeno exclusivamente a la pobreza material: la motivación económica es central, pero coexiste con agravios comunitarios acumulados, con la búsqueda de protección frente a abusos de fuerzas estatales o milicias rivales, con el deseo de pertenencia y reconocimiento en un contexto de exclusión social, y con, en menor medida, la convicción ideológica (UNDP, 2023). Lo que aparece con mayor consistencia es el papel de la marginalización percibida como catalizador principal del paso a la acción violenta, una conclusión con implicaciones de política pública de primer orden si se considera que las percepciones de injusticia y de

exclusión pueden ser tan relevantes como los indicadores materiales a la hora de diseñar respuestas de prevención.

Las comunidades fulani (o peul) ofrecen el ejemplo más documentado de esta dinámica de agravios percibidos. Distribuidas en una veintena de países africanos, con una presencia estimada de entre 25 y 40 millones de personas en África Occidental, las comunidades fulani han sido sistemáticamente estigmatizadas y acusadas de connivencia con el yihadismo (en muchos casos por el simple hecho de compartir etnia con Amadou Kouffa, líder de la Katiba Macina y número dos de JNIM) con independencia de su relación real con los grupos armados (Cissé, 2020). Esta estigmatización ha desembocado en ataques masivos por parte de milicias de autodefensa de otras etnias y en operaciones de las fuerzas de seguridad con víctimas civiles fulani que se cuentan por centenares, lo que ha empujado a sectores de estas comunidades hacia JNIM, no por adhesión doctrinal sino como mecanismo de supervivencia y de búsqueda de protección cuando el Estado no solo no la ofrece sino que se convierte en fuente de amenaza. Aquí encontramos otro círculo vicioso como en el caso de las fuentes de financiación o la debilidad estatal frente a la economía de guerra, y es que los ataques estatales contra comunidades fulani generan nuevos reclutas para JNIM, lo que a su vez legitima nuevas operaciones antiterroristas que vuelven a generar víctimas civiles y nuevos agravios que se convierten en nuevos adeptos. Es un ciclo que la investigación del *Combating Terrorism Center* había identificado ya hace varios años y que los datos de 2024 y 2025 confirman como el patrón estructural dominante del reclutamiento en la región (HRW, 2026).

En línea con lo anterior, la expansión más reciente de JNIM en zonas fronterizas de Benín, Togo y Ghana responde a la instrumentalización de tensiones intercomunitarias preexistentes, especialmente conflictos agrícola-pastoriles por tierras y agua, y en la oferta de servicios de seguridad y resolución de disputas allá donde el Estado está ausente. La diversificación étnica del reclutamiento, con combatientes provenientes de comunidades fulani, gourmantché, djerma, bariba y de redes de bandidaje local reconvertidas en afiliados, es una expresión de esa estrategia adaptativa que combina cierto agravio identitario con la oportunidad económica y la fuerza cuando ninguna de las dos vías anteriores funciona (Cengiz, 2026).

La presión demográfica impacta también de manera directa en la competencia por unos recursos ya de por sí escasos, que se analiza en el siguiente subapartado. La tierra arable, los pastos y el acceso al agua se convierten en bienes cada vez más disputados a medida que la población crece y las condiciones cíclicas del clima los reducen. Esta dinámica genera en última instancia intensas tensiones locales que los grupos armados explotan rápidamente, aprovechando la deficiencia estructural del Estado en la gestión y resolución de tales conflictos.

4.3. Pobreza, inseguridad alimentaria e indicadores socioeducativos

Si la fragilidad estatal y la presión demográfica explican el entorno estructural en el que los grupos terroristas operan, la pobreza, la inseguridad alimentaria y el déficit educativo determinan las condiciones concretas de vulnerabilidad individual y comunitaria sobre las que ese entorno se asienta. En los países del Sahel Central, entre el 45% y el 50% de la población vive actualmente por debajo del umbral de pobreza nacional, variando entre el 15% y el 50% en situación de pobreza absoluta según el país que se examine. Zonas como el norte de Burkina Faso, donde el 70% de la población vive en condiciones de pobreza, o el cinturón fronterizo de Níger, donde alrededor de 2.2 millones de personas en provincias como Agadez, Diffa, Tillabéri y Zinder se encuentran en una condición crítica por la escasez alimentaria, representan las áreas más extremas de una distribución que no tiene excepciones geográficas significativas en toda la franja sahelo-sahariana (GRFC, 2025).

La inseguridad alimentaria ha pasado de ser un fenómeno cíclico, vinculado a sequías o a malas cosechas, a convertirse en una crisis estructural cuyo motor principal es, además del clima, la violencia armada, el desplazamiento forzoso y la desintegración de los sistemas productivos locales. En África Occidental y el Sahel, actualmente más de 40 millones de personas se encuentran en una grave crisis alimentaria y nutricional según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2026). En el Sahel Central específicamente, la violencia intrayihadista y entre grupos extremistas y fuerzas gubernamentales ha interrumpido el acceso a los campos de cultivo, ha destruido infraestructuras de almacenamiento, ha desplazado a las comunidades agricultoras antes de la siembra o la cosecha y ha interrumpido rutas comerciales que conectaban los mercados rurales con los centros de abastecimiento, generando un déficit productivo que en las

regiones de Liptako-Gourma y la cuenca del Lago Chad supera el 5% de la producción normal en ciclos de relativa estabilidad (FEWS NET, 2024).

Cuando las familias pierden cosechas, ganado o acceso a mercados como consecuencia de la violencia o del desplazamiento, las estrategias de supervivencia disponibles se reducen de manera drástica, y entre ellas aparece con frecuencia la incorporación, voluntaria o bajo coacción, con frecuencia en un espacio intermedio difícil de categorizar, a las redes económicas que los grupos armados controlan. Esta integración no siempre implica una conversión ideológica o incluso el combate activo, pero sí genera dependencias económicas y vínculos que dificultan el abandono posterior y que los grupos explotan para ampliar su base social sin necesidad de incrementar sus efectivos militares. En línea con esto se relaciona el incremento del 40% en la destrucción deliberada de infraestructuras hídricas por parte de grupos extremistas entre 2019 y 2024, una estrategia de control del acceso al agua que convierte la escasez en un instrumento de sometimiento comunitario tan eficaz como cualquier operación armada (Mant, Patel y Munasinghe, 2024).

En materia educativa, el déficit es igualmente estructural y ha empeorado de manera sustancial desde 2019. En Burkina Faso, UNICEF (2023) registró el cierre de una de cada cuatro escuelas en el país al inicio del curso 2023- 2024 a consecuencia de la inseguridad, un total de 6.149 centros, dejando a más de un millón de niños y niñas sin acceso a la educación y a más de 31.000 docentes sin posibilidad de ejercer su función. En Mali, la destrucción o el abandono de centros escolares en el centro y norte del país ha desembocado en una generación entera de jóvenes que han crecido sin escolarización regular y cuya socialización ha ocurrido en el contexto de la guerra, con todas las implicaciones que ello conlleva para los programas de prevención y desradicalización futuros. Las tasas de alfabetización en los países del Sahel Central se encuentran entre las más bajas del mundo, alrededor del 35-40%, según los datos del Banco Mundial más recientes (2023 en el caso de Burkina Faso y Mali, y 2022 en el caso de Níger) y la capacidad de las juntas militares actuales para revertir esa tendencia es prácticamente nula en las condiciones de conflicto activo que dominan el interior de sus respectivos países.

Los cambios cíclicos del clima actúan en este sistema como multiplicador de todas las vulnerabilidades anteriores, amplificando sus efectos y acelerando los plazos en los que se

materializan. Las temperaturas en el Sahel están aumentando a un ritmo 1.5 veces superior al promedio global, lo que acelera la desertificación, reduce la disponibilidad de pastos y agua potable y multiplica la frecuencia e intensidad de episodios climáticos extremos como sequías prolongadas e inundaciones repentinas (Alliance Sahel, s.f.). El año 2024 registró un récord histórico de olas de calor en la región, según la Organización Meteorológica Mundial (2024), y sus efectos sobre las cosechas, el ganado y la disponibilidad de agua se sumaron a los ya producidos por el conflicto armado.

Los grupos armados capitalizan el contexto que la escasez de recursos crea, ofreciendo sistemas de arbitraje en disputas sobre tierras y agua, y acceso a fuentes de ingresos alternativas para mineros y pastores desplazados

Los grupos armados han aprendido a posicionarse en este espacio que la escasez de recursos crea, ofreciendo sistemas de arbitraje en disputas sobre tierras y agua, acceso a fuentes de ingresos alternativas para mineros y pastores desplazados[16], y un marco narrativo que atribuye esa escasez a la corrupción estatal, a la indiferencia de las élites urbanas o a la intervención de potencias extranjeras, con una eficacia movilizadora que sería mucho menor si los hechos del entorno no le dieran tanta credibilidad. Las disputas entre agricultores sedentarios y pastores nómadas, que las condiciones climáticas intensifican al desplazar las rutas de trashumancia hacia el sur, donde la disponibilidad de agua y pastos ha disminuido pero la densidad de población agrícola ha aumentado, han pasado a estar entre los factores de reclutamiento más eficaces del terrorismo en la región. Aquí, los grupos ofrecen mecanismos de gobernanza y de resolución de disputas percibidos por parte de la población como más eficaces o legítimos que los estatales, lo que les permite obtener cooperación local, legitimidad e influencia territorial.

[16] Fuentes de seguridad locales.

5. Implicaciones para España y la Unión Europea

El terrorismo, el crimen organizado y la inestabilidad en el Sahel y África Occidental se han convertido en variables de seguridad con consecuencias directas, cuantificables y crecientes sobre los intereses de España y la Unión Europea[17]. La retirada progresiva de la presencia occidental de la región, en buena medida forzada por las juntas que llegaron al poder en Mali, Burkina Faso y Níger entre 2020 y 2023, no ha reducido la exposición de Europa a las dinámicas del conflicto en el Sahel, sino que la ha aumentado al eliminar los mecanismos de observación, disuasión e influencia que las misiones desplegadas aportaban. Los países de la Alianza de Estados del Sahel (AES) han construido su narrativa de legitimidad interna en buena medida sobre el rechazo explícito a la tutela occidental, mientras los grupos armados continúan expandiendo su presencia territorial y económica sin que ningún actor disponga del acceso, capacidad y voluntad política necesarias para interrumpir esa dinámica.

Es en este contexto en el que debe entenderse la reformulación estratégica que la Comisión Europea encargó a la Alta Representante Kaja Kallas en septiembre de 2024 y que culminó con la adopción de un enfoque renovado en el Consejo el 20 de noviembre de 2025. El mandato reconocía explícitamente los riesgos de inestabilidad y la necesidad de revisar los instrumentos disponibles, pero el proceso de negociación interna puso de manifiesto las fricciones de fondo que siguen sin resolverse en el seno de la propia Unión. Existe una tensión evidente entre los Estados miembros que priorizan el pragmatismo y la continuidad del diálogo, entre los que se encuentran España, Italia, Portugal y Alemania, y aquellos que consideran que cualquier compromiso con las juntas militares compromete los valores constitutivos del proyecto europeo (Brown, 2024). Esa tensión determina, en última instancia, si Europa puede actuar o solo puede gestionar los efectos secundarios de su propia fragmentación.

5.1. Intereses estratégicos europeos en juego

El primero y más documentado de los intereses europeos es el que se deriva del papel del Sahel y África Occidental como corredor estructural de los flujos de economías ilícitas que terminan afectando a la seguridad interior europea. El Sahel se ha consolidado como corredor

[17] Entrevistas a fuentes de seguridad nacionales.

de tránsito y consolidación de múltiples mercados ilícitos y esas economías criminales están profundamente entrelazadas con la actividad de los grupos armados en la medida en que los ingresos criminales financian las operaciones insurgentes mientras que los grupos proporcionan protección, capacidad coercitiva y acceso territorial a los traficantes, generando un vínculo que erosiona el control de las fronteras, alimenta la corrupción y debilita sistemáticamente unas estructuras estatales ya de por sí frágiles (INIS, 2025). Para Europa, los extremos receptores de esas cadenas logísticas se encuentran en puertos y ciudades europeas, y desmantelarlas requiere actuar sobre toda la cadena, incluido el tramo de origen o tránsito en el Sahel que opera fuera del alcance jurisdiccional europeo.

En lo que respecta al narcotráfico, aproximadamente un tercio de la cocaína destinada a los mercados europeos transita actualmente por África Occidental, y algunos expertos señalan que hay factores estructurales que mantienen esa ruta atractiva a largo plazo y que esa proporción podría alcanzar la mitad de los flujos totales para 2030 (OCCRP, 2025). La Agencia de la Unión Europea para las Drogas confirmaba en su informe de 2025 que el tráfico de drogas es altamente dinámico y se adapta con rapidez a los desarrollos geopolíticos y los cambios en las rutas comerciales, y que la cocaína sigue siendo la segunda droga más consumida en Europa, con una disponibilidad que continúa aumentando (EUDA, 2025).

El mercado de cocaína, junto con el de drogas sintéticas, están monopolizando el mercado global de drogas, y buena parte de esta industria, en su paso por África con destino a su consumidor final en la propia África, Europa o Asia, transcurre por espacios donde opera el extremismo violento. Estos actores terminan beneficiándose de forma indirecta del narcotráfico, imponiendo gravámenes a los traficantes en los territorios bajo su control, y esos mismos corredores sirven para mover simultáneamente drogas, armas y personas bajo una misma infraestructura logística. Que la rentabilidad de esas redes criminales depende en parte de la ausencia o debilidad del Estado en los territorios que atraviesan convierte la fragilidad estatal del Sahel en una variable con consecuencias directas para la seguridad interior de los países europeos situados al final de esa cadena.

Algunas estimaciones apuntan que la proporción de cocaína destinada a los mercados europeos que transita vía África Occidental podría alcanzar el 50% de los flujos totales en 2030

Para España, esa posición estructural tiene una relevancia que va más allá de la que corresponde a cualquier otro país miembro del sur de Europa. Como principal punto de entrada de la cocaína al mercado europeo y como extremo receptor de la ruta atlántica de la migración irregular, España concentra en su territorio las consecuencias inmediatas de flujos cuyo origen o punto de paso se sitúa en contextos donde la capacidad estatal para regularlos es mínima. El Ministerio del Interior registraba 46.843 llegadas a las Islas Canarias en 2024, el máximo histórico desde que Frontex comenzó a recopilar datos en 2009, con un crecimiento del 19% en la ruta atlántica mientras el resto de rutas hacia Europa descendía un 40%, y con Mali, Senegal y Marruecos como principales nacionalidades de origen (Frontex, 2025; Ministerio del Interior, 2025). Esas cifras, en el caso de los migrantes provenientes de la franja del Sahel, reflejan una auténtica crisis de desplazamiento forzado cuyas causas estructurales están directamente relacionadas con el conflicto armado y el colapso de los medios de vida en sus países de origen, y son también el indicador de que la misma infraestructura de redes criminales dedicadas al tráfico de personas que opera en esos corredores genera ingresos para actores que participan en las economías ilícitas regionales, incluidos los grupos armados que imponen peajes sobre los flujos migratorios en los tramos bajo su control.

El segundo vector de interés es el que se deriva de la pérdida de capacidad de observación e inteligencia que ha acompañado a la retirada de las misiones europeas del Sahel Central. Este es quizás el menos visible de los intereses en juego, pero en términos de consecuencias a largo plazo puede ser el más costoso. Baldaro y Strazzari sostenían en 2023 que el problema fundamental de la política europea en la región no era solo la elección de instrumentos equivocados sino la incapacidad estructural para producir una lectura compartida de la naturaleza de la amenaza, los objetivos a perseguir y las soluciones disponibles, lo que generó expectativas mutuas fallidas y erosionó progresivamente el capital político de la presencia europea (Baldaro y Strazzari, 2023). Esa incapacidad de lectura se agrava cuando la presencia física desaparece, porque la información estratégicamente más relevante sobre la evolución de los grupos armados, las economías de guerra y los flujos de tráfico sigue siendo la que se obtiene por proximidad humana a los contextos de decisión, y no puede ser sustituida por vigilancia tecnológica o análisis desde la distancia. La brecha de inteligencia acumulada desde las retiradas de 2022-2024 afecta directamente a la capacidad de las agencias europeas para anticipar la evolución de los flujos que conectan el Sahel con el Norte de África y desde allí

con Europa, y sus consecuencias solo se hacen visibles cuando ya es demasiado tarde para actuar sobre sus causas.

El tercer vector es el de la influencia sobre los condicionantes estructurales que hacen posible la reproducción del sistema terrorismo-crimen organizado. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas señalaba en su previsión mensual de diciembre de 2025 que la intensificación de este vínculo en el Sahel, donde las redes criminales financian grupos terroristas a través del blanqueo de capitales, el narcotráfico, el tráfico de armas y personas y el comercio ilícito de recursos naturales, genera una alarma real sobre el potencial efecto indirecto hacia regiones no afectadas previamente (Security Council Report, 2025). Para Europa, ese efecto no es solo geográfico sino también funcional, porque cada extensión del territorio bajo influencia de los grupos armados es una extensión de la infraestructura logística que sostiene los flujos ilícitos hacia el norte (Magreb) y hacia el sur (costas del Golfo de Guinea y extensión hacia el resto de África Subsahariana). La capacidad de incidir sobre esos condicionantes estructurales requiere presencia, instrumentos y voluntad política que el desenganche de los últimos años ha erosionado profundamente.

Un último interés que conviene destacar guarda relación con los recursos minerales estratégicos, un eje que ha ganado peso en los últimos años a medida que la transición energética europea ha puesto de manifiesto la dependencia estructural del continente respecto a cadenas de suministro externas. El Sahel es una región geológicamente rica en materiales que forman parte directa de esa cadena: el uranio de Níger ha alimentado durante décadas los reactores nucleares franceses y ha tenido presencia en el mix energético europeo, pero también hay reservas documentadas de litio, manganeso y cobre cuya importancia estratégica aumentará a medida que avance la electrificación de las economías europeas.

Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo (2026) señala que la UE sigue siendo altamente dependiente de proveedores externos para los minerales esenciales a sus objetivos energéticos y de seguridad. La nacionalización por parte del gobierno militar de Níger de la mina Somaïr, que Orano operaba desde décadas, fue, además de un acto político, un recordatorio de que el acceso a esos recursos no puede darse por garantizado en entornos de alta inestabilidad y que la sustitución de operadores occidentales por actores afines a

Moscú o Pekín tiene consecuencias que afectan directamente a la seguridad de suministro europea.

5.2. Evaluación de los instrumentos desplegados

Algunos análisis sobre el desalineamiento estratégico de la política europea de prevención y lucha contra el extremismo violento en el Sahel sostienen que la narrativa dominante en Bruselas y París tiende a presentar las dificultades de la UE en la región y el ascenso de los competidores geopolíticos como fenómenos separados, o incluso a presentar las dificultades europeas como consecuencia de la intervención rusa, cuando en realidad ambos procesos están directamente ligados a los problemas estructurales de la propia oferta europea de asistencia en seguridad (Baldaro y Strazzari, 2023).

La ruptura más visible fue institucional[18] y estuvo precipitada por una secuencia de decisiones tomadas entre 2022 y 2024: la expulsión de los contingentes franceses de Mali en agosto de 2022 y de Burkina Faso en enero de 2023, la disolución de la MINUSMA a finales de 2023, el cese de la EUTM Mali en mayo de 2024 tras once años de presencia y la revocación por parte de Níger de los acuerdos que sostenían la EUCAP Sahel Níger y la misión EUMPM en diciembre de 2023, dando a ambas seis meses para abandonar el país. La EUTM Mali terminó su presencia de once años sin haber contribuido a ninguna mejora significativa de la situación de seguridad (Meyer, Simonet y Späth, 2025). El propio Servicio Europeo de Acción Exterior, en su Revisión Estratégica Holística de 2023, reconocía que las actividades de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en Mali sufrían de una ausencia crónica de evaluación y seguimiento que dificultaba medir su impacto real sobre las FAMa (Tull, 2022).

El análisis de los instrumentos desplegados requiere distinguir entre los logros tácticos, que fueron reales pero insuficientes, y la ausencia de efecto estratégico, que también fue real. En el plano securitario, la Operación Barkhane neutralizó entre 2013 y 2022 a un número significativo de mandos operativos de los grupos terroristas, interrumpió temporalmente algunas rutas de tráfico transahariano y mantuvo un paraguas de seguridad que permitió el funcionamiento de iniciativas civiles en periodos de relativa estabilidad. Las victorias tácticas fueron reales (como por ejemplo la eliminación de prácticamente todos los combatientes

[18] Entrevistas a fuentes de seguridad locales.

extranjeros yihadistas de origen argelino, mauritano, libio y tunecino) pero los objetivos estratégicos de la misión descansaban sobre una evaluación errónea de las dinámicas políticas y comunitarias del Sahel, lo que terminó convirtiendo los éxitos militares en avances sin una cierta consolidación política (Institut Montaigne, 2023). La presión militar sobre los grupos terroristas tuvo el efecto no deseado de diversificar sus economías de guerra, haciéndolos más resilientes precisamente porque su base de reproducción financiera quedó fuera del alcance de la fuerza militar y se integró de forma más profunda en las estructuras económicas locales. La infraestructura de financiación criminal no solo sobrevivió a Barkhane sino que se fortaleció durante los años de mayor presión operativa, lo que hace difícil sostener que una operación más larga o más intensa habría producido un resultado diferente sin una estrategia económica formulada en paralelo.

Las misiones de entrenamiento y capacitación de la UE tuvieron un valor añadido real en términos de formación técnica, pero se documentaba ya en 2020 que tanto la EUCAP como la EUTM sufrían de una ausencia crónica de coordinación entre sí y con el resto de instrumentos europeos. Los representantes de las misiones de la UE y de Naciones Unidas en Mali rara vez se coordinaban, o ni siquiera se relacionaban, con la misión EUCAP en el país, lo que generaba una brecha entre los objetivos generales de los programas europeos y el entorno de seguridad en el que operaban, reduciendo su eficacia de forma estructural (Lebovich, 2018). A esa limitación de coordinación se añadía la imposibilidad práctica de garantizar que las fuerzas entrenadas con fondos europeos no fueran empleadas en operaciones de represión indiscriminada, un problema que se identificaba en 2024 para las misiones civiles de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea (PCSD) en el Sahel como consecuencia del interés selectivo de los gobiernos anfitriones por las actividades de las misiones, más orientados hacia la eficacia operativa que hacia la rendición de cuentas (Van der Lijn et al., 2024). Cuando las fuerzas entrenadas y equipadas por Europa terminaron operando junto a Africa Corps en operaciones que investigaciones independientes atribuían como responsables de cientos de muertes de civiles, el daño reputacional no solo afectaba a las misiones en cuestión sino a la credibilidad del modelo europeo de asistencia en seguridad en su conjunto.

La cooperación al desarrollo siguió un patrón de intervención técnicamente competente pero políticamente desconectada de los contextos de seguridad, un problema que los análisis

sobre el nexo seguridad-desarrollo en las políticas europeas hacia el Sahel han identificado como endémico y anterior a los golpes de Estado. Ese desalineamiento demostró, en última instancia, que lo que se defendía en el plano teórico (abordar de manera local la gestión del conflicto) no se conseguía llevar a la práctica, afectando la credibilidad y la legitimidad de la UE sobre el terreno. La congelación masiva de la ayuda al desarrollo tras los golpes de Estado fue presentada como una condicionalidad política necesaria y coherente con los principios del modelo europeo, pero en la práctica privó de recursos a las poblaciones más vulnerables, precisamente las más susceptibles de ser captadas por las economías de guerra de los grupos armados, y reforzó la narrativa de las juntas sobre la instrumentalización política de la ayuda europea, contribuyendo involuntariamente a legitimar el giro soberanista ante una opinión pública que percibía los recortes no como una señal hacia los gobiernos militares sino como un abandono de las comunidades de base.

La EUCAP Sahel Mali, que continúa operativa en Bámako en un entorno diplomático extremadamente complicado, mantiene canales de interlocución con las fuerzas de seguridad malienses a nivel de información y soporte que ninguna alternativa disponible puede reproducir en el corto plazo. La iniciativa de seguridad y defensa en el Golfo de Guinea, lanzada en 2023 como una asociación flexible con Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín, representa exactamente el tipo de adaptación que el contexto requiere: presencia ligera, focalizada en necesidades específicas de los socios, sin la rigidez institucional que lastró las misiones en Sahel Central y acompañada de cooperación humanitaria y al desarrollo. Las primeras evaluaciones internas del SEAE sobre esta iniciativa señalan su capacidad para responder a las necesidades de los socios de forma personalizada y flexible, lo que contrasta favorablemente con el modelo de misiones de larga duración y objetivos rígidos que caracterizaron a las experiencias anteriores (SEAE, 2023).

5.3. Líneas de acción estratégica

A pesar de que el contexto actual obliga a abandonar la idea de una cooperación europea con el Sahel similar a la establecida hace una década, los intereses europeos en la región tienen una proyección en el largo plazo que no desaparecerá por el simple hecho de que los instrumentos desplegados durante los últimos años hayan demostrado sus limitaciones. El foco pasa por asimilar que cualquier reformulación viable tendrá que abordarse equilibrando

los principios normativos que definen el modelo europeo y las concesiones pragmáticas que exige la realidad del contexto. El propio Consejo de la UE reconocía en su enfoque de noviembre de 2025 que contener la violencia y el crimen organizado son intereses prioritarios de la UE en la región, y que para perseguirlos es imprescindible involucrarse política y diplomáticamente (Consejo de la UE, 2025a). La idea de un cierto pragmatismo como principio normativo de esa nueva estrategia se encuentra en una fase conceptual y no se han adoptado los mecanismos institucionales necesarios para operacionalizarla, lo que invita a sugerir algunas potenciales líneas de acción para incluir en futuras fases de preparación:

→ ***Consolidar y ampliar el anclaje en los países costeros del Golfo de Guinea***.

La expansión de JNIM hacia Benín, Togo, Ghana y el norte de Costa de Marfil no es solo un problema de esos países sino una ventana de oportunidad para la diplomacia preventiva europea que se vuelve cada vez más urgente a medida que los grupos armados consolidan su presencia. A diferencia de los países de la AES, esos Estados mantienen relaciones funcionales con la UE, han expresado disposición a recibir apoyo en materia de seguridad y gobernanza, y ofrecen el tipo de contexto institucional en el que los instrumentos europeos pueden producir efectos reales. La iniciativa de seguridad y defensa en el Golfo de Guinea, lanzada en 2023 con Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín, ya se mueve en esa dirección con un modelo que contrasta con las misiones de larga duración desplegadas hace una década en el Sahel Central, y su ampliación debería convertirse en una prioridad explícita en el ciclo estratégico actual. En marzo de 2026, la UE formalizó con Ghana su primer Acuerdo de Seguridad y Defensa con un país africano, diseñado para profundizar la cooperación en amenazas transnacionales, seguridad marítima y ciberataques, en lo que se describía como una señal de reorientación estratégica de la política europea en África Occidental (SEAE, 2026). Esta lógica debería extenderse de forma sistemática a los demás países costeros y, en particular, a Senegal, que ocupa una posición estratégica dentro de la región como uno de los pocos países de África Occidental que mantiene instituciones democráticas estables y una relación funcional tanto con los socios europeos como con los países de la AES. En julio de 2025, el Consejo de la UE adoptó la primera medida de asistencia bajo la Facilidad Europea para la Paz destinada a las fuerzas armadas senegalesas, por un valor de 10 millones de euros orientados a reforzar capacidades de vigilancia y protección de la población civil frente a los factores de

inseguridad derivados de la violencia en el Sahel (Consejo de la UE, 2025b). Ese paso es relevante no solo por su dimensión operativa sino porque Senegal ocupa en el panorama regional un papel de intermediario con credibilidad suficiente para actuar como interlocutor entre los países costeros y los de la AES. Sus enviados especiales, junto con los de Ghana, encabezan una diplomacia de aproximación con los gobiernos militares de Bámako, Uagadugú y Niamey, una dinámica que debería continuar y coordinarse mejor con el objetivo de contribuir a reducir tensiones y restaurar la confianza en el largo plazo (Souaré y Toupane, 2024).

→ ***Consolidar el Magreb y Mauritania como cinturón de seguridad del flanco sur europeo.***

Las rutas de la cocaína, el oro, las armas y las personas que parten del Sahel atraviesan varias fronteras políticas antes de llegar al Mediterráneo o al Atlántico. El Magreb y, en particular, Mauritania, son eslabones estructurales de esas cadenas logísticas, lo que los convierte simultáneamente en parte del desafío que la UE intenta abordar y en socios imprescindibles para abordarlo con cierta eficacia. Mauritania ocupa la posición de único país que mantiene relaciones funcionales con la UE, que ha resistido la presión de las juntas para adherirse a la AES y que ha demostrado una capacidad de contención del extremismo violento en su territorio que los propios análisis europeos atribuyen en parte a su política de reconciliación nacional y reintegración de antiguos combatientes, una experiencia documentada como uno de los escasos ejemplos de éxito de contención en el contexto saheliano. Mauritania supone un amortiguador vital contra la inestabilidad de su vecindario y un socio central para las políticas energéticas y de migración de Europa, que ha apoyado al país africano con 47 millones de euros destinados al refuerzo de las capacidades de sus fuerzas armadas (SEAE, 2025). Ese compromiso debería mantenerse en la medida que la estabilidad de Mauritania en el flanco occidental del Sahel es, junto con la contención en los países costeros del Golfo de Guinea en el sur, uno de los dos vectores de prevención más eficientes disponibles para Europa en el horizonte inmediato.

En la misma línea, resulta esencial mantener y fortalecer los canales de cooperación con el máximo número posible de los países del Magreb en materia de seguridad y gestión de amenazas comunes. Aunque los mecanismos existentes de intercambio de inteligencia

operativa con la región permanecen activos, es fundamental profundizar estos lazos de colaboración y establecer canales de comunicación preferentes y fluidos, tanto desde Bruselas, Madrid o París como en sentido inverso. Esta cooperación mutua adquiere especial relevancia ante el hecho de que cualquier expansión de la inestabilidad y la violencia en el Sahel o en el Golfo de Guinea constituirá un desafío de seguridad compartido que, inevitablemente, repercutirá en las fronteras por orden geográfico, lo que complicará la gestión de crisis y podrá afectar la estabilidad de los entornos domésticos en el Norte de África, África Central y las regiones más próximas al foco del conflicto.

→ ***Reformular el diálogo con la AES sobre bases transaccionales sin imposiciones normativas de corto plazo.***

España, junto con Bélgica, Países Bajos y Portugal, está tratando de construir consenso en torno a una estrategia europea que reconozca que los recursos disponibles son limitados y que la dificultad de encontrar puntos de acuerdo con los países AES es real (International Crisis Group, 2025). Esa posición es más realista que la del aislamiento diplomático, y debería traducirse en una iniciativa de liderazgo más articulada dentro del Consejo. La reformulación implica aceptar que el diálogo con las juntas de la AES no puede partir de la suposición de que la cooperación europea es un bien al que el interlocutor debe corresponder con concesiones normativas, porque las juntas no operan bajo esa lógica y el voluntarismo europeo en ese punto ha producido más frustración que resultados. Lo que sí puede funcionar es un diálogo basado en intereses concretos y mutuamente reconocibles, el control de los flujos de bienes ilegales que atraviesan el Sahel, el acceso a recursos minerales estratégicos para la transición energética europea y la contención de redes criminales transnacionales que afectan a ambas partes, un encuadre que el propio Consejo reconoce en su enfoque renovado cuando habla de identificar dominios de beneficio mutuo o compartido. Este reposicionamiento no significa abandonar las condicionalidades en materia de derechos humanos, sino aplicarlas de forma más estratégica como palancas de largo plazo vinculadas a incentivos concretos, en lugar de utilizarlas como condiciones previas que bloquean cualquier conversación antes de empezarla.

→ ***Desarrollar la cooperación técnica multilateral en el rastreo de flujos financieros ilícitos***.

La lógica que sostiene esta línea es la misma que recorre el análisis de las economías de guerra, y es que el ecosistema criminal del Sahel no distingue entre narcotráfico, tráfico de armas o explotación humana porque todos esos mercados comparten buena parte de las infraestructuras, actores y mecanismos de protección. Cualquier mecanismo de seguimiento de ambos fenómenos por separado producirá una imagen incompleta de la estructura que se busca combatir. La respuesta requiere una plataforma técnica multilateral, preferiblemente articulada en torno a los mecanismos ya existentes, que sea capaz de cruzar de forma sistemática los datos de incautaciones de drogas, transacciones de oro en mercados de alto riesgo, registros de transferencias y rastreo de divisas con los análisis de actividad terrorista.

El contexto geopolítico en el que se articulan estas líneas de acción propuestas es un espacio de competición y transformación, en el que Rusia ha construido su presencia sobre la oferta de seguridad sin condicionalidades, China mantiene una presencia económica políticamente poco visible pero económicamente muy relevante, y Turquía ha expandido su cooperación de defensa aprovechando la reticencia de las juntas a depender exclusivamente de Moscú. La competencia internacional por la influencia y el acceso a los recursos minerales de la región debería disuadir a la UE de un desenganche completo, pero al mismo tiempo su respuesta no debería pasar por una competencia geopolítica en los mismos términos que la de sus rivales considerando que Europa carece de los instrumentos y la disposición para ofrecer seguridad sin condicionalidades. Aun así, el club europeo puede y debe desarrollar una oferta basada en lo que efectivamente tiene, que incluye capacidad institucional, instrumentos financieros, redes de cooperación y una presencia histórica en la región cuyo valor, a pesar de todo lo que se ha erosionado, ninguno de sus competidores actuales puede reproducir a corto plazo. El representante especial de la UE para el Sahel, João Cravinho (2025), señalaba en diciembre de 2025 que la región está en un momento de transformación sociopolítica y demográfica profunda, y que los pasos dados por la UE para apoyar la estabilidad regional a largo plazo requieren una adaptación continua a un contexto en permanente cambio. Esa adaptación continua, que no significa rendirse sino ser realista, es precisamente lo que distingue una política estratégica de una política de principios sin efectos sobre el terreno.

6. Conclusiones

El Sahel y África Occidental constituyen el epicentro mundial del yihadismo, concentrando una violencia basada en la lucha armada y un fenómeno híbrido donde concurren elevadas tasas de letalidad operativa, gobernanza alternativa y control económico territorial. La relación de grupos como JNIM, Estado Islámico en el Sahel e ISWAP con las economías criminales transnacionales ha alcanzado un grado de integración estructural que redefine las dinámicas de poder en la región. Este vínculo y su retroalimentación criminal son el motor principal de la reproducción y expansión del extremismo violento intrarregional, con capacidad de generar ingresos estables a través de gravámenes sobre múltiples mercados ilícitos, al tiempo que construyen legitimidad local allí donde el Estado se encuentra ausente o no actúa con las garantías de seguridad necesarias que espera la sociedad civil.

La evolución de JNIM hacia una organización de carácter adaptativo, con capacidad para operaciones complejas y el control de corredores estratégicos que se extienden hacia el Golfo de Guinea, junto con el crecimiento operativo de Estado Islámico-Sahel y las actividades de ISWAP y Boko Haram en la cuenca de lago Chad, demuestran que el terrorismo local ha transitado de actor insurgente a un gestor de economías de guerra autosuficientes. Esta práctica financia la violencia y la sostiene mediante una gobernanza paralela que resuelve disputas, ofrece protección y genera dependencias comunitarias, especialmente entre las poblaciones afectadas por la fragilidad estatal, la corrupción endémica, la presión demográfica, el desempleo juvenil masivo y la inseguridad alimentaria. El control de yacimientos auríferos, rutas migratorias y puntos de peaje ha permitido a los grupos violentos diversificar riesgos, minimizar su exposición directa y mantener su resiliencia frente a presiones militares, aprovechando la porosidad fronteriza y las redes transnacionales que facilitan el blanqueo y la reinversión de recursos ilícitos.

La reconfiguración geopolítica derivada de la retirada occidental y la irrupción de actores han exacerbado los vacíos de gobernanza sin ofrecer alternativas viables. Las juntas militares, en la búsqueda de políticas y alianzas soberanistas más agresivas, han debilitado los estándares institucionales y parte de su propia legitimidad, facilitando la expansión de las economías que alimentan el terrorismo. Este vacío ha multiplicado los riesgos para la estabilidad regional y proyectado desafíos y amenazas con impactos más allá del continente africano.

Las respuestas esencialmente securitarias, centradas en operaciones militares o en la formación de fuerzas locales, no han logrado abordar la dimensión económica que subyace. La presión antiterrorista puede desplazar temporalmente a los combatientes o fragmentar facciones, pero la infraestructura financiera criminal, integrada en el tejido social y económico local, tiende a persistir e incluso fortalecerse cuando las instituciones nacionales que deberían combatirla se encuentran comprometidas por la misma corrupción y fragilidad que alimentan las economías ilícitas. Esto produce, en última instancia, un ciclo de inestabilidad que genera más oportunidades para el crimen organizado y allana el terreno a mayores condicionantes para la radicalización y el reclutamiento armado.

Para España y la Unión Europea, la estabilidad del Sahel constituye un interés estratégico de primer orden que trasciende la gestión de los efectos secundarios generados por el terrorismo, el crimen organizado o la inestabilidad. La reformulación de la estrategia europea, con un mayor foco en los países costeros del Golfo de Guinea y en un pragmatismo transaccional con la AES, debe integrar de manera coherente el triángulo seguridad, gobernanza y desarrollo, priorizando el fortalecimiento de nodos de contención regional, la cooperación técnica en el rastreo de flujos financieros y la diplomacia preventiva que aborde las causas estructurales sin caer en intervenciones desconectadas de la realidad local.

En última instancia, la frontera entre el terrorismo y el crimen organizado en el Sahel y África Occidental se ha difuminado hasta volverse inoperativa en varios contextos y contraproducente en muchos otros. Lo que emerge es un sistema de conflicto autosuficiente donde la violencia política y el lucro criminal se refuerzan mutuamente, alimentados por condicionantes profundos que ninguna operación militar por sí sola tiene capacidad para desarticular. Frente a esta situación, cualquier aproximación exige una estrategia pragmática, adaptativa y coherente, que reconozca la naturaleza económica y social del fenómeno y sea capaz de movilizar instrumentos civiles, diplomáticos y de inteligencia de forma pragmática y responsable. España y la UE, por su posición geográfica, vínculos históricos y capacidad para articular respuestas multidimensionales, disponen de una oportunidad única para contribuir a una estabilización que proteja sus intereses vitales y apoye trayectorias de gobernanza más resilientes en una de las regiones más críticas para la seguridad compartida euroafricana.

7. Referencias bibliográficas

Abderrahmane, A. (2022). *Cross-border smuggling / Mali: West Africa's hub for illegal gold trade with Dubai*. ENACT.

Adeleye, P. (2025). *People smugglers enriched in Niger's Agadez after junta dumps EU migration deal.* The Africa Report.

Adeyemi, S. (2026). *How Burkina Faso recovered over $16 million, uncovered 25 hidden gold fraud network.* Business Insider Africa.

Africa Defense Forum [ADF]. (2023). *New Report Examines al-Qaida's Kidnapping Strategy in the Sahel*.

Africa Defense Forum [ADF]. (2025a). *ISWAP Drains Lake Chad Region Through Taxes*.

Africa Defense Forum [ADF]. (2025b). *Terror Groups Diversify to Find Steady Flow of Illicit Financing*.

Africa Defense Forum [ADF]. (2025c). *Nigeria Works to Tighten Controls over ISWAP's Methods of Financing*.

Africa Defense Forum [ADF]. (2026). *Benin, Nigeria Unite Against Terrorism*.

Agencia de la Unión Europea para las Drogas [EUDA]. (2025). *Cocaine – the current situation in Europe*. European Drug Report 2025.

Aguilera, A. (2023). *Terrorismo y crimen organizado: tráfico y contrabando de armas en el norte de África y el Sahel*. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

Aguilera, A. (2024). *Terrorismo, trata de seres humanos y contrabando de migrantes en África y Oriente Medio*. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

Aguilera, A. (2026). *La protección de los Derechos Humanos frente a los retos y desafíos en África Occidental*. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

Aguilera, A. en Igualada, C. et al. (2026). *Anuario del Terrorismo Yihadista 2025*. Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

Ahmad, A. (2017). *Jihad & Co.: Black markets and Islamist power*. Oxford University Press.

Alharathy, S. (2024). *Ethiopian migrant tortured in Libya, mother's fundraising plea for $15,000 ransom*. The Libya Observer.

Alliance Sahel. (s.f.). *The Sahel and the Challenges of Climate Change*.

Analytical Support and Sanctions Monitoring Team (2025). *Monitoring Team's Thirty-fifth report*. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Anane-Amponsah, M. (2024). *Marijuana, cocaine, heroin making Africa hard drugs transit hub — UNODC*. Graphic Online.

Baldaro, E. y Strazzari, F. (2023). Strategic misalignment: European security and P/CVE engagement in the Sahel. *Mediterranean Politics*, 30(3), 639-649.

Bertelsmann Stiftung's Transformation Index [BTI]. (2026). *BTI 2026 Country Report: Burkina Faso*.

Bird, L. y Hunter, M. (2022). *Mining and extractives / Will Burkina Faso's closure of artisanal gold mines work this time?* ENACT.

Bocchi, A. (2018). *Libya's Rogue Militias Keep the Country From Tackling Human Trafficking*. Jamestown Foundation. Vol. 16, Issue 4.

Brown, W. (2024). *Aligned in the sand: How Europeans can help stabilise the Sahel*. European Council on Foreign Relations.

Cengiz, M. (2026). *JNIM's Expansion in the Sahel and Coastal West Africa*. Homeland Security Today.

Cissé, M.G. (2020). *Understanding Fulani Perspectives on the Sahel Crisis*. Africa Center for Strategic Studies.

Comisión Europea. (2025). *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la Estrategia de la UE sobre Drogas*.

Conflict Armament Research. (2022). *Weapon supplies fuelling terrorism in the Lake Chad crisis*.

Consejo de la UE. (2025a). *Foreign Affairs Council, 20 November 2025*.

Consejo de la UE. (2025b). *European Peace Facility: Council adopts assistance measure in support of Senegal*.

Council on Foreign Relations. (2025). *A conversation with João Cravinho, EU Special Representative for the Sahel Region*.

Dufka, C. (2021). *Armed Islamists' Latest Sahel Massacre Targets Burkina Faso*. Human Rights Watch.

Eaton, T. y Tinti, P. (2024). *How conflict shapes practices within transnational human smuggling and trafficking networks*. Chatham House.

Eizenga, D. y Williams, W. (2020). *The Puzzle of JNIM and Militant Islamist Groups in the Sahel*. Africa Center for Strategic Studies.

Famine Early Warning Systems Network [FEWS NET]. (2024). *Food insecurity levels remain high, particularly in conflict zones.*

Fereday, A. (2025). *Niger: Decriminalization Reshapes Human Smuggling but Sahel Upheaval and Border Closures Prevent Return to Pre-2015 Levels*. Human smuggling and trafficking ecosystems – North Africa and the Sahel. 2025 Series. Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

France 24. (2026). *Inside Nigeria's crypto craze*.

Frontex. (2025). *Annual Risk Analysis 2025-2026.*

Fund for Peace. (2024). *Fragile States Index 2024*.

Geneva Centre for Security Sector Governance [DCAF]. (2021). *Critical Human Security Issues in Burkina Faso.*

Global Initiative Against Transnational Organized Crime [GI-TOC]. (2024). *Benin–Niger border closure drives surge in migrant smuggling profits*. Risk Bulletin #11.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime [GI-TOC]. (2025a). *GITOC West Africa Hotspot Mapping Initiative 2025*.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime [GI-TOC]. (2025b). *Africa Organised Crime Index 2025*.

Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI]. (2020). *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: United Arab Emirates.* Mutual Evaluation Report.

Global Report on Food Crises [GRFC]. (2025). *GRFC 2025 Niger*.

Human Rights Watch. (2026). *"None Can Run Away": War Crimes and Crimes Against Humanity in Burkina Faso by All Sides*.

Hunter, M. (2020). *Dubai's dubious gold standards*. Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

Hunter, M. (2022). *Beyond blood: Gold, conflict and criminality in West Africa*. Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC) / ENACT.

Hunter, M. y Ofosu-Peasah, G. (2025). *Violent Extremist Threats to Northern Ghana's Gold Sector*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

Institut Montaigne. (2023). *Operation Barkhane: Success? Failure? Mixed Bag?*

International Crisis Group. (2025). *Watch List 2025 – Spring Update*.

Jupp, J. (2025). The Crime-Terror Nexus and the Illicit Trade in Drugs. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1–28.

Kapetanovic, T. (2025). Applying the Transplantation Framework to JNIM's Expansion in the Sahara-Sahel: A Criminological Lens en *Journal of Illicit Economies and Development,* Vol. 7, Issue: 1.

Klyszcz, I.U. y Marangio, R. (2025). *The multi-aligned Sahel: Reframing the EU's role in a crowded región*. European Union Institute for Security Studies.

Lanzano, C., Luning, S. y Ouédraogo, A. (2021). *Insecurity in Burkina Faso – beyond conflict minerals*. NAI Policy Notes 2021:3. The Nordic Africa Institute.

Laplace, M. (2023). *A behind-the-scenes look at al-Qaeda's kidnapping strategy in the Sahel*. The Africa Report.

Lebovich, A. (2018). *Halting Ambition: EU Migration and Security Policy in the Sahel*. European Council on Foreign Relations (ECFR).

Lessing, B. (2021). Conceptualizing Criminal Governance en *Perspectives on Politics*, 19(3), 854–873.

Lewis, D., McNeill, R. y Shabalala, Z. (2019). *Gold worth billions is smuggled out of Africa - new analysis*. Reuters.

Mant, K. Patel, J. y Munasinghe, S. (2024). *From Crisis to Conflict: Climate Change and Violent Extremism in the Sahel*. Tony Blair Institute for Global Change.

Martynova, E. (2025). *Gold, Guns, and Cattle: JNIM's $100 million War Economy in the Sahel*. Insight Threat Intelligence.

Meyer, A. Simonet, L. y Späth, J. (2025). *The European Union and the Sahel: the day after*. Austrian Institute for International Affairs.

Ministerio del Interior. (2025). *Inmigración irregular 2024: datos acumulados del 1 de enero al 31 de diciembre.*

Nagarajan, C. et al., (2024). *Survival and Struggle: The Experience of Women and Girls With and After Boko Haram*. UNIDIR.

Reuters. (2025). *Burkina Faso grants mining lease to Russia's Nordgold for gold project*.

Reynolds, N. et al. (2026). *Russia in Africa: Examining Moscow's Influence and Its Limits*. Carnegie Endowment for International Peace.

Rich, D. (2024). *Double attaque d'Al-Qaïda à Bamako : le Mali face aux limites de sa stratégie sécuritaire*. France 24.

Samuel, M. (2025). *When rebels rule: ISWAP's formula for winning support in Nigeria's northeast*. The New Humanitarian.

Servicio Europeo de Acción Exterior [SEAE]. (2023). *EU Security and Defence Initiative in Support of West African Countries of the Gulf of Guinea*.

Servicio Europeo de Acción Exterior [SEAE]. (2025). *European Peace Facility: Council adopts third assistance measure in support of the Armed Forces of Mauritania*.

Servicio Europeo de Acción Exterior [SEAE]. (2026). *Ghana: Press release on the signing of a Security and Defence Partnership and handover of EPF military equipment*.

Security Council Report. (2025). *West Africa and the Sahel, December 2025 Monthly Forecast*.

Shoer, S. (2024). Proxy Power and Precious Minerals: Russia's Growing Footprint in Africa through the Wagner Group en *Inter Populum: The Journal of Irregular Warfare and Special Operations*, Vol. 2, No. 1. Arizona State University.

Stanyard, J. (2025). *Mercenaries and illicit markets: Russia's Africa Corps and the business of conflict*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

Tagziria, L. y Bird, L. (2025). *Illicit economies and instability: Illicit hub mapping in West Africa 2025*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

Transparency International Defence & Security [TI-DS]. (2024). *Country: Burkina Faso*.

Tribunal de Cuentas Europeo. (2026). *Critical raw materials for the energy transition: Not a rock-solid policy*. SPECIAL REPORT 04/2026.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2023). *Gold trafficking in the Sahel*. Transnational Organized Crime Threat Assessment (TOCTA).

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2024a). *Drug trafficking undermining stability and development in Sahel region, says new report from UNODC*.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2024b). *Drug trafficking in the Sahel*. Transnational Organized Crime Threat Assessment (TOCTA).

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2024c). *Impact of transnational organized crime on stability and development in the Sahel*. Transnational Organized Crime Threat Assessment (TOCTA).

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. (2026). *West Africa and the Sahel: Nearly 52.8 Million People Could Face Acute Food Insecurity During the 2026 Lean Season (June-August)*. FAO Regional Office for Africa.

Organización Internacional del Trabajo [OIT]. (2024). *Employment trends for youth in Sub-Saharan Africa. Global Employment Trends for Youth 2024*.

Organización Meteorológica Mundial. (2024). *Significant Weather & Climate Events.*

Organized Crime and Corruption Reporting Project [OCCRP]. (2025). *Why Are Some European Drug Gangs Burying Cocaine Instead of Selling It?*

Souaré, I.K. y Toupane, P.M. (2024). *Could Senegal help mediate tensions between ECOWAS and AES states?* Institute for Security Studies (ISS).

Tull, D. (2022). *Security Force Assistance under Geopolitical Stress: The EU's "Strategic Review" of its CSDP Missions in Mali*. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

UN News. (2024). *Trafficking in the Sahel: Cracking down on illicit drugs*.

UNICEF. (2017). *Generation 2030 Africa 2.0 Executive Summary*.

UNICEF. (2023). *Burkina Faso: New academic year starts with one million children out of school due to ongoing violence and insecurity – UNICEF*.

United Nations Development Programme [UNDP]. (2023). *Journey to Extremism in Africa: Pathways to Recruitment and Disengagement*.

U.S. Department of State. (2023). *2023 Trafficking in Persons Report: Nigeria*.

U.S. Department of State. (2024a). *2024 Country Reports on Human Rights Practices: Burkina Faso*.

U.S. Department of State. (2024b). *2024 Trafficking in Persons Report: Burkina Faso*.

U.S. Department of State. (2025a). *2025 Trafficking in Persons Report: Libya*.

U.S. Department of State. (2025b). *2025 Trafficking in Persons Report: Burkina Faso*.

Van der Lijn, J. et al. (2024). *Assessing the Effectiveness of European Union Civilian CSDP Missions Involved in Security Sector Reform: The Cases of Afghanistan, Mali and Niger*. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Whitehouse, B. (2023). *Illicit Flows to the UAE Take the Shine off African Gold*. Middle East Research and Information Project.

OIET
OBSERVATORIO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO